

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

QUEJOSA Y RECURRENTE: *****

PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIA: ADRIANA M. RAMÍREZ SÁNCHEZ

COLABORADORAS: DULCE MARÍA BRITO OCAMPO Y JACINTA SANTACRUZ DEL VALLE

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una mujer trans de nacionalidad guatemalteca obtuvo el reconocimiento como refugiada en México por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debido a la persecución por motivos de género que sufrió en su país de origen.

En cumplimiento de la normativa aplicable, el Instituto Nacional de Migración (INM) le expidió una tarjeta de residente permanente conforme a los datos asentados en la constancia de reconocimiento de la condición de refugiada. No obstante, dicha tarjeta reflejaba el nombre y género asignados al nacer (masculino), en lugar de su identidad de género. Por tal motivo, la hoy quejosa y recurrente solicitó al INM la modificación de dichos datos en su tarjeta de residencia.

El INM inicialmente respondió que su petición sería consultada con la COMAR. En seguimiento, remitió oficios a dicha comisión el 28 de julio y el 21 de septiembre de 2021, en los que le solicitó orientación sobre el procedimiento a seguir para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género de la persona extranjera. La COMAR respondió el 28 de septiembre e indicó que la interesada debía presentarse en sus oficinas para recibir orientación sobre los trámites correspondientes, sin establecer un procedimiento concreto.

Posteriormente, mediante oficio ***** de fecha 30 de septiembre de 2021 (acto reclamado), el INM informó a la solicitante sobre la respuesta emitida por la COMAR y le indicó que, para atender su petición, primero debía actualizar su constancia de reconocimiento como refugiada ante dicha comisión. Una vez cumplido este requisito, podría iniciar el trámite migratorio correspondiente conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 56 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios –notificación de cambio de nombre y reposición de documento migratorio–.

El 21 de octubre de 2021, la solicitante presentó una petición formal ante la COMAR solicitando el cambio de nombre y género en su constancia de reconocimiento de la condición de refugiada. Mediante el oficio ***** del 29 de octubre de 2021, la COMAR solicitó al titular de la Dirección General del Registro Civil su colaboración para determinar el procedimiento administrativo aplicable para adecuar el nombre y género de una persona extranjera refugiada.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Ante esta situación, el 26 de octubre¹ la quejosa promovió un juicio de amparo: (i) en contra del Poder Legislativo y de la Presidencia de la República por la emisión de los artículos 126 a 137 de la Ley de Migración, argumentando que omiten prever procedimientos que permitan a personas trans adecuar sus documentos migratorios a su identidad de género, lo cual resulta en una discriminación estigmatizante; y (ii) en contra del Director General de Regulación y Archivo Migratorio del INM, por la emisión del oficio de 30 de septiembre que –considera–, trasladó indebidamente la responsabilidad a la COMAR sin resolver su petición.

El juez de distrito sobreseyó en el juicio al considerar que los artículos impugnados de la Ley de Migración únicamente establecen atribuciones de la autoridad migratoria sin constituir una forma de discriminación directa. Determinó que se trata de normas heteroaplicativas, cuya constitucionalidad requiere un acto de aplicación, por lo que no podían reclamarse en su carácter de autoaplicativas. En cuanto al acto de aplicación –el oficio del INM– se estimó que la demanda fue presentada de manera extemporánea.

Frenta a esta decisión, la quejosa interpuso recurso de revisión que ahora se resuelve.

	Apartado	Decisión	Págs
I.	ANTECEDENTES Y TRÁMITE	En esta sección se narran los antecedentes que dieron origen al asunto, así como el trámite judicial. Se exponen los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, las consideraciones del juez de distrito y los agravios de la quejosa en el recurso de revisión.	2-22
II.	COMPETENCIA, OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN	La Primera Sala es competente para conocer del presente asunto. La revisión se interpuso de forma oportuna y por parte legitimada .	22-23
III.	PROCEDENCIA DEL RECURSO	El recurso es procedente, por lo que se analizarán los agravios de la parte recurrente, en contra de la resolución recurrida. Si estos resultan fundados, se estudiarán los conceptos de violación que el quejoso planteó en su demanda de amparo	23

¹ Es decir, de forma anterior a que la COMAR emitiera oficio a la Dirección General del Registro Civil.

YEZcv5Pwzp2Kxz+n0Qon1+nNWWHuZKJ5LboqRxrzLOW=

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

IV.	ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS	Esta Primera Sala estima que los agravios de la recurrente son esencialmente fundados y suficientes para levantar el sobreseimiento decretado por el juzgado de distrito.	23-50
V.	ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA	Esta Primera Sala estima que las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables son infundadas e inoperantes. Se estudia, esencialmente, la falta de conceptos de violación, la falta de interés, y la posible vulneración al principio de relatividad.	50-64
VI.	ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN	En esta sección se estudia la constitucionalidad de las normas y del reclamadas y del oficio reclamado. Se declaran parcialmente fundados los conceptos de violación de la quejosa, pero suficientes para ampararla.	64-104
VII.	EFFECTOS	Se desarrollan los efectos de la concesión del amparo.	104-110
VIII.	DECISIÓN	PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en contra de los artículos y actos reclamados en términos del último apartado de esta sentencia.	110

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023
QUEJOSA Y RECURRENTE:
*****2

VISTO BUENO
SR. MINISTRA/O
PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

COTEJÓ
SECRETARIA: ADRIANA M. RAMÍREZ SÁNCHEZ
COLABORADORAS: DULCE MARÍA BRITO OCAMPO Y JACINTA
SANTACRUZ DEL VALLE

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al **once de junio de dos mil veinticinco**, mediante el cual emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 512/2023, interpuesto por *********, en contra de la resolución que dictada el 22 de abril de 2022 por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en el expediente auxiliar **130/2022**, en apoyo al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien registró el juicio de amparo indirecto bajo el número de expediente **1386/2021**.

Los problemas jurídicos que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver son los siguientes:

En primer lugar, determinar si, como afirmó el juez de distrito, el juicio de amparo fue presentado fuera del plazo legal previsto, o si, por el contrario,

² En el proceso judicial ante esta Suprema Corte de Justicia se ha tramitado la revisión añadiendo que la quejosa tiene nombre asignado al nacer el de *********. En la ejecutoria se ha elegido no hacer referencia a este nombre, pues, en primer lugar, no es cómo la parte quejosa se ha presentado en sus escritos y, en segundo lugar, es el reconocimiento a su identidad es lo que se está cuestionando en la litis de amparo. Véase la tesis de jurisprudencia 1a./J. 196/2023 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo II, página 1508, Registro digital: 2027802, de rubro **“IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA. ESTÁNDARES PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE PERSONAS TRANS QUE PARTICIPAN EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES”**.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

resulta procedente revocar la sentencia reclamada, por haberse promovido el amparo oportunamente.

En caso de estimarse procedente el levantamiento del sobreseimiento, en segundo término deberá analizarse la constitucionalidad del marco normativo migratorio –en particular, los artículos 63, segundo párrafo, de la Ley de Migración; 167 de su Reglamento; así como los artículos 35, 55 y 56 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios– por excluir, entre los cambios posibles en la tarjeta de residencia permanente, la modificación del marcador de género/sexo, lo que repercute directamente en el reconocimiento legal de la identidad de las personas trans³ extranjeras.

Finalmente, deberá examinarse si el oficio impugnado –que representa la respuesta emitida por la autoridad migratoria a la solicitud de modificación documental presentada por una mujer trans refugiada– se ajusta o no al parámetro de regularidad constitucional.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. **Hechos que antecedieron a la demanda de amparo.** De las constancias que obran en autos⁴, se desprenden los antecedentes siguientes:

- La quejosa, *********, nació en Guatemala, donde le fue asignado al nacer el sexo masculino debido a sus características genitales. No obstante, afirma que desde pequeña y a lo largo de su vida se identificó y desarrolló conforme a la identidad del género femenino.

³ Se utiliza el término “trans” en atención a que el movimiento de activismo internacional por los derechos de las personas trans ha preferido la utilización de dicho prefijo por encima de los términos formulados por la psiquiatría o la psicología, con el objetivo de despsiquiatrizar y despatologizar la condición, la identidad, las expresiones y las experiencias trans y para poner de relieve que se *transita* y se *transgreden* los géneros y los sexos. Véase Rueda Castillo, A., *Derechos de las personas trans*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista DFensor, marzo 2015, consultable en la siguiente liga: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34727.pdf>

⁴ Expediente del juicio de amparo indirecto 1386/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- La quejosa relata que desde su infancia en Guatemala sufrió discriminación y violencia debido a su identidad de género. También fue víctima de violencia ejercida por parte de un grupo de la delincuencia organizada, por la que se vio forzada a cerrar un local comercial que tenía.
- Sostiene que huyó de su país por las agresiones constantes por parte de la sociedad. Narra como ejemplo de la violencia que vivía y la inacción del Estado, un altercado que tuvo en el que dos sujetos la golpearon y la agredieron verbalmente por ser una mujer trans. Como resultado del altercado y otros sucesos, la quejosa presentó diversas denuncias ante el Ministerio Público de su país; sin embargo, las autoridades no procedieron con las investigaciones correspondientes por discriminación en razón de su identidad de género.
- A raíz de lo anterior, la quejosa consideró que estaba en riesgo su vida, por lo que decidió buscar refugio en México.
- El dieciocho de marzo de dos mil veinte, la quejosa fue reconocida como refugiada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en adelante “la COMAR”). La COMAR tuvo por acreditado el riesgo que corría su vida e integridad por razones de identidad de género.
- El veintiocho de mayo de dos mil veinte, la quejosa realizó el trámite de regularización de su condición migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (INM o Instituto, en adelante). El veinticinco de junio del mismo año, se emitió su tarjeta de residencia permanente, la cual contiene los datos de identidad correspondientes a su nombre y género asignados al nacer (*****, de género masculino) y no los datos propios de su identidad de género.
- Ante tal circunstancia, el trece de junio de dos mil veintiuno, presentó un escrito de petición al Instituto para solicitar que los datos de identidad asentados en su tarjeta de residente permanente fueran adecuados a su identidad de género. La quejosa argumenta que el documento migratorio expedido le ha generado múltiples dificultades y que, a consecuencia de ello, ha sufrido rechazo, burlas e insultos en el país.
- El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el INM le notificó que su petición sería consultada con la COMAR y, una vez solventada, se haría de su conocimiento⁵.
- El dos de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa se tiene por notificada del oficio ***** de fecha treinta de septiembre de ese año, mediante el cual el INM sostiene que para modificar sus documentos, primero tiene que acudir a la COMAR para que esta autoridad rectifique los datos de identidad de género en la Constancia

⁵ Mediante oficio *****.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

de Reconocimiento de la Condición de Refugiada. Según el oficio, una vez que se modifique la constancia de reconocimiento la quejosa podría iniciar el trámite migratorio correspondiente ante el INM para rectificar la tarjeta de residente permanente.

- Finalmente, el veintiuno de octubre de del mismo año, la quejosa presentó escrito de petición a la COMAR para solicitar la adecuación de sus datos de identidad en la Constancia de Reconocimiento de la Condición de Refugiada, de conformidad con su identidad de género. Señala que su escrito fue sellado y se le indicó que la contactarían cuando tuvieran información al respecto.

2. **Demanda de amparo indirecto.** Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de los siguientes actos y autoridades responsables:

- a) De la **Cámara de Diputados y Cámara de Senadores**, ambas del Congreso de la Unión, así como del **Presidente de la República**, en el respectivo ámbito de sus competencias, se reclama la discusión aprobación, expedición y promulgación del capítulo IX, artículos 126 a 137, de la Ley de Migración por no prever un procedimiento para que las personas trans adecúen sus documentos a su identidad de género.
- b) Del **Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración**, se reclama el oficio ********* como acto concreto de aplicación.

3. En su escrito, la quejosa plantea los siguientes conceptos de violación:

Primero. *Sobre la violación al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la identidad, al nombre y a otros derechos conexos, por la negativa discriminatoria del Instituto Nacional de Migración para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad.*

- La quejosa sostiene que la respuesta del Instituto ante su petición para la modificación de su tarjeta de residencia, en la que se señaló que primero debía modificarse la constancia de reconocimiento de refugiada ante la COMAR –sin que exista un procedimiento para tales efectos–, vulnera sus derechos humanos a la dignidad humana, la identidad personal (incluida la de género), el nombre, el libre desarrollo de la personalidad, la seguridad jurídica y el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo señala que la respuesta impugnada es evasiva pues traslada la responsabilidad a otra autoridad.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- Señala que el Estado mexicano no puede desconocer su obligación de garantizar el derecho a la identidad de las personas extranjeras trans que residen en el territorio mexicano, ni mucho menos desconocer su derecho a ser protegidas contra la discriminación estructural que sufren.
- Considera que la tarjeta de residencia permanente debe ser vista como un documento de identidad primigenio de personas extranjeras en México pues contiene fotografía, CURP, nombre completo, número único de extranjero, nacionalidad, país de origen, sexo, fecha de nacimiento, firma autógrafa, código de reconocimiento óptico de caracteres y correlación con el Registro Nacional de Extranjeros. Así, si las personas mexicanas tienen el derecho a que su documento primigenio, el acta de nacimiento, sea modificado para reflejar su identidad de género, lo mismo debería ocurrir con las personas extranjeras.
- Añade que dicha tarjeta se trata de un documento que constituye un medio de identificación para la realización de diversos trámites frente a la Administración Pública Federal, así como para la tramitación de otros documentos de identidad y viaje, por lo que, en aras de proteger su derechos a la no discriminación, libre desarrollo de la personalidad e identidad (entre otros) debe ser conforme con la identidad de género de la persona.
- Expresa que, a diferencia de las personas trans mexicanas, ella no tiene acceso a un procedimiento que le garantice el reconocimiento de su identidad de género por su condición de extranjera, lo que se presenta como una medida discriminatoria interseccional que le provoca una afectación grave a su esfera jurídica, al combinarse su vulnerabilidad como mujer, trans, extranjera y refugiada.
- Considera que el hecho de que la COMAR pueda modificar los documentos que emite para las personas trans –la constancia de la condición de refugiada–, no exime al INM de la obligación de garantizar su derecho a la identidad mediante la modificación de los datos de su tarjeta de residencia, puesto que ésta se trata del primer documento de identidad efectivo.
- Estima que el INM es la autoridad competente para garantizar el derecho a la identidad de las personas extranjeras trans, debido a que (1) maneja y mantiene el Registro Nacional de Extranjeros, (2) emite documentos de identificación para personas extranjeras, (3) controla el estatus migratorio de esas personas, (4) se presenta como una autoridad administrativa y (5) cuenta con facultades para modificar los documentos de las personas extranjeras en el país.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Segundo. *Sobre la discriminación establecida en las normas al excluir de su redacción y aplicación la existencia de las personas trans extranjeras.*

- La quejosa sostiene que la Ley de Migración es discriminatoria pues no prevé disposiciones que reconozcan la identidad y la existencia de las personas trans extranjeras.
- La exclusión que la norma realiza sobre personas trans extranjeras se constituye como un discurso discriminatorio que afecta de manera continua a las personas trans, señalando la poca valía que tienen para el sistema jurídico mexicano y perpetuando un estigma existente contra las personas trans y contra las personas extranjeras. Esto se ve agravado por las limitantes interpretativas y la exclusión normativa para reconocer su identidad de género.
- La exclusión absoluta del reconocimiento de las personas trans, como parte del grueso social que conforma a la población en México, es un claro mensaje de rechazo e invisibilización sobre su existencia.
- El mensaje discriminatorio que se emite por parte de las autoridades causa grave afectación a la quejosa y perpetúa estigma en el que viven las personas trans en el continente. Con ello, la normativa reclamada no sólo es discriminatoria al negar o impedir la garantía de los derechos de la quejosa, sino que causa una afectación continua y permanente a sus derechos en tanto emite mensajes discriminatorios y estigmatizantes que deben ser erradicados.

4. **Informe justificado de la Cámara de Diputados.** Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, Juan Uribe Mejía, Subdirector de Amparos y representante Legal de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el informe justificado por parte de la Cámara de Diputados Federal en el cual señaló lo siguiente:

- **Certeza del acto reclamado.** Son ciertos los hechos que se le atribuyen.
- **Sobre su constitucionalidad.** La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Migración se realizó con estricto apego al procedimiento y facultades que al efecto establece la Constitución Federal, de ahí que sostenga la regularidad constitucional de su actuar.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

5. **Informe justificado de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.** Por escrito presentado el diez de noviembre, Graciela Galicia Doctor, en su carácter de Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, presentó el informe justificado del Senado de la República, en el que, en síntesis, expone lo siguiente:

- **Certeza del acto reclamado.** No es cierto que el Senado haya expedido la Ley de Migración, en concreto los artículos 126 a 137. Sólo es cierto que el Senado discutió, votó y aprobó la Ley de Migración.
- **Causales de improcedencia.** Se debe decretar el sobreseimiento en el juicio, con base en el artículo 63, fracción IV⁶ de la Ley de Amparo, pues si bien el Senado participó en la discusión, votación y aprobación de la ley impugnada, lo cierto es que por sí sola no expidió los artículos impugnados. Dicho acto fue realizado por el Congreso de la Unión como órgano colegiado.
- Por otro lado, sostuvo que la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad de mérito no causa afectación alguna a los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que las normas no generan necesariamente un perjuicio en su esfera jurídica. Estimó que el daño que reclama la quejosa no es propio, es totalmente independiente de su actuar y sus facultades, sino que se atribuye a un acto de ejecución posterior.

6. **Informe justificado del Presidente de la República.** Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, Concepción María del Rocío Balderas Fernández, Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación presentó el informe justificado del Poder Ejecutivo Federal, en el cual se argumentó, en síntesis, lo siguiente:

- **Certeza del acto reclamado.** En primer lugar, reconoció que el acto reclamado consistente en la promulgación del Decreto es cierto. En segundo lugar, señaló que el acto reclamado es constitucional pues se realizó con fundamento en el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal.

⁶ Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- **Causales de improcedencia.** Por otro lado, sostuvo que se actualizan tres causales de improcedencia.
- La primera prevista en la fracción XXIII, del artículo 61⁷, en relación con el diverso 108, fracción VIII⁸, ambos de la Ley de Amparo, al no haberse manifestado verdaderos conceptos de violación. A su juicio, de un análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solamente realizó afirmaciones generales e imprecisas que no constituyen la expresión de conceptos de violación concisos que permitan el estudio de constitucionalidad de la norma federal impugnada. Consideraron que en la demanda no se vierten manifestaciones dirigidas a combatir la constitucionalidad del título IX de la Ley de Migración, pues hace depender su constitucionalidad del actuar el INM y la COMAR –es decir, únicamente del acto de aplicación.
- La segunda causal que invocó es la prevista en el artículo 61, fracción XII⁹ de la Ley de Amparo. A su parecer los actos reclamados –incluido el capítulo IX de la Ley de Migración– no generan un agravio irreparable en la esfera jurídica de la quejosa y por lo tanto esta carece de interés para acudir al juicio de amparo.
- A su juicio, la quejosa parte de una premisa falsa, pues en ningún momento los actos que le reclamaron generaron perjuicio a su esfera de derechos. Esto (i) porque el capítulo IX de la Ley de Migración está dirigido a todas las personas extranjeras sin excluir o hacer distinción alguna por su situación particular, (ii) porque en el oficio impugnado no se aplica el capítulo de la Ley de Migración que reclama, y (iii) a la quejosa tampoco le niegan su solicitud de cambio de datos de identificación conforme a su identidad, en tanto que únicamente le informan los procedimientos que debe realizar para dicho cambio.
- Por lo tanto, a su consideración los actos reclamados por ningún motivo le causan una afectación irreparable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del juicio de amparo.

⁷ **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

⁸ **Artículo 108.** La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

VIII. Los conceptos de violación.

⁹ **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la persona quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- La tercera causal invocada es la prevista en la fracción XXIII del artículo 61¹⁰ en relación con los artículos 73¹¹ y 77¹², todos de la Ley de Amparo, referente a la imposibilidad de concretarse los efectos restitutorios de la sentencia de amparo por reclamarse la inconstitucionalidad de una omisión legislativa.
- El Ejecutivo sostuvo que el juicio de amparo es improcedente, ya que, aún en el supuesto de obtenerse una sentencia favorable, sus efectos protectores no podrían concretarse al reclamarse la inconstitucionalidad de una omisión legislativa. Esto se debe a que el principio de relatividad del amparo impide que la sentencia obligue a las autoridades legislativas a subsanar dicha omisión, pues ello implicaría dotar a la resolución de efectos generales, lo cual es contrario a la naturaleza misma del juicio de amparo y a la regularidad constitucional que este procura salvaguardar.
- Una eventual sentencia protectora obligaría a los órganos legislativos a emitir una norma que subsane la omisión detectada, lo cual generaría beneficios para personas distintas a la parte quejosa. Esta expansión de los efectos del amparo violaría el principio de relatividad que rige este juicio.
- **Respecto al fondo**, el Ejecutivo argumentó que el planteamiento parte de un problema de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que los conceptos de violación resultan inoperantes. A su juicio, la constitucionalidad de una norma general debe analizarse con base en sus características objetivas, aplicables a todos sus destinatarios, y no en situaciones particulares de la parte quejosa. Así, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general a partir de circunstancias individuales, los conceptos de violación deben desecharse por no demostrar una violación constitucional atribuible a la norma en sí, cuya validez debe analizarse en relación con todos sus destinatarios y no con uno solo.
- Asimismo, calificó como infundado el concepto de violación relacionado con la inconstitucionalidad del Capítulo IX de la Ley de Migración. Aun cuando este no menciona expresamente a las personas trans, regula

¹⁰ **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

¹¹ **Artículo 73.** Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de las o los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.

¹² **Artículo 77.** Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá a la persona quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

los supuestos aplicables al procedimiento administrativo migratorio para obtener documentos conforme a la identidad social auto percibida. Los requisitos establecidos son generales y aplicables a todas las personas extranjeras, sin distinción de identidad o situación particular.

- En cuanto al oficio impugnado, señaló que este no negó la solicitud de cambio de documento, sino que únicamente informó a la persona quejosa sobre los procedimientos necesarios para obtener dicha modificación. **Aunque tales procedimientos no se encuentran en el capítulo reclamado, sí están previstos en los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios.**
- En consecuencia, el Capítulo IX de la Ley de Migración no debe interpretarse de manera aislada, sino en conjunto con el resto de las disposiciones contenidas en la propia Ley, su reglamento y los lineamientos aplicables. Bajo esta interpretación sistemática, no se advierte la existencia de un trato discriminatorio hacia las personas trans extranjeras derivado de su identidad autopercebida.

7. **Informe justificado del Instituto Nacional de Migración.** El tres de diciembre de dos mil veintiuno, el representante de la Dirección Jurídica General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, presentó el informe justificado del Instituto, el cual señaló, en síntesis, lo siguiente:

- **Certeza del acto reclamado.** En primer lugar, reconoció como cierto el acto reclamado únicamente en cuanto a la emisión del oficio ***** notificado por correo electrónico el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, se destacó que dicho oficio no negó a la quejosa la posibilidad de modificar su tarjeta de residente permanente.
- **Causales de improcedencia.** En segundo lugar, se señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61¹³ de la Ley de Amparo pues el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa.
- Lo anterior, debido a que el derecho de petición fue atendido. El oficio impugnado forma parte del seguimiento dado por el INM al trámite, e informó a la quejosa que, para proceder con la modificación de su tarjeta de residencia, previamente debía solicitar la modificación de la

¹³ **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la persona quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

constancia de reconocimiento de la condición de refugiada, lo cual corresponde a la COMAR. Esto se fundamenta en la necesidad de brindar una protección integral a la persona extranjera y en que, según los registros de la COMAR, la constancia en cuestión aún consigna el nombre de “*****”.

- **Respecto al fondo.** Por otro lado, se sostuvo que no existió un acto discriminatorio por parte del INM, dado que la legislación aplicable es general y abstracta, estableciendo procedimientos que deben seguir todas las personas extranjeras en materia de regulación migratoria. En ese sentido, se afirmó que la solicitud de la quejosa fue atendida, y que el INM buscó la colaboración de distintas autoridades para que la quejosa pudiera obtener un documento migratorio que refleje su nombre y género conforme a su identidad autopercebida.
- En este contexto, y como se le informó a la quejosa en el oficio impugnado, el trámite correspondiente es la solicitud de notificación de cambio de nombre y reposición de documento, conforme a lo dispuesto en los **artículos 35¹⁴ y 56¹⁵ de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, así como los requisitos previstos en el artículo 63, segundo párrafo, de la Ley de Migración¹⁶ y el artículo 167 de su Reglamento¹⁷.**
- Se destacó que la notificación de cambio es un trámite obligatorio para todas las personas extranjeras, tanto residentes temporales como permanentes, que deseen informar al INM sobre cualquier modificación de sus datos. En el caso de personas refugiadas que desean modificar el dato relativo al género, se requiere previamente actualizar la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado; ésta funge como documento de identidad y debe reflejar el nombre y género que salvaguarden los derechos adquiridos mediante dicha condición.

¹⁴ **Artículo 35.** Ficha del trámite para la expedición de documento migratorio en la modalidad, reposición de documento migratorio: (...)

¹⁵ **Artículo 56.** Ficha del trámite para que los residentes notifiquen cambios.

¹⁶ **Artículo 63.** El Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información relativa a todos aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de residente temporal o de residente permanente.

Los extranjeros tendrán la obligación de comunicar al Instituto de cualquier cambio de estado civil, cambio de nacionalidad por una diversa a la cual ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro de los noventa días posteriores a que ocurra dicho cambio.

¹⁷ **Artículo 167.** Las personas extranjeras residentes temporales y permanentes deberán notificar al Instituto, dentro de los siguientes noventa días naturales a que ocurran, los cambios de estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo. Para ello, deberán presentar solicitud de trámite y los siguientes documentos:

I. Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste, según sea el caso, su nuevo domicilio o lugar de trabajo;

II. En el caso de cambio de estado civil, deberá presentar acta de matrimonio, sentencia de divorcio con fecha en que causó ejecutoria o acta de defunción del cónyuge, y

III. En el caso de cambio de nacionalidad, deberá presentar pasaporte de la nueva nacionalidad, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- Asimismo, conforme a los artículos 32 y 33 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria¹⁸, la facultad para reconocer y modificar los datos personales –como nombre y género– de las personas extranjeras corresponde a la COMAR, órgano independiente del INM. Dado que la quejosa obtuvo la residencia permanente por haber sido reconocida como refugiada por la COMAR, el INM se encuentra a la espera de que dicho organismo realice las modificaciones correspondientes en la constancia de reconocimiento, a fin de poder llevar a cabo los trámites migratorios y emitir la tarjeta de residente permanente con los datos actualizados. Esto con fundamento en los artículos 15, fracción X¹⁹ del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y 85 segundo párrafo, del mismo ordenamiento²⁰.
- Por tanto, se concluyó que el cambio de datos en la constancia de refugio es indispensable para que la quejosa pueda obtener una nueva constancia que le permita ejercer plenamente los derechos derivados de su condición de refugiada.

¹⁸ **Artículo 32.-** Durante la entrevista, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones:

- I. Proporcionar información sobre sus antecedentes personales, los cuales podrán ser verificados con las autoridades competentes;
- II. Aportar con veracidad información sobre los motivos por los que salió de su país de origen o de residencia habitual y si, en su caso, proviene de un tercer país;
- III. Aportar pruebas o, en su caso, explicar de manera satisfactoria la falta de las mismas;
- IV. Relatar las circunstancias de las razones invocadas en apoyo de su solicitud, y
- V. Proporcionar cualquier otra información que el entrevistador estime necesaria para esclarecer la existencia de fundados temores o amenazas en su contra.

Artículo 33.- La información sobre los antecedentes personales del solicitante a que se refiere la fracción I del artículo anterior, incluirá sus datos de identidad personal, tales como:

- I. Nombre completo, alias o pseudónimos;
- II. Fecha y lugar de nacimiento;
- III. Nacionalidad o país de residencia habitual;
- IV. Grupo étnico;
- V. Sexo;
- VI. Estado civil;
- VII. Religión;
- VIII. Ocupación;
- IX. Grado máximo de estudios, e
- X. Idioma o lengua que habla el solicitante.

Para efectos de evaluar las declaraciones con el objetivo de determinar los elementos objetivos y subjetivos del caso, el solicitante deberá aportar información sobre los familiares que lo acompañan y los que residan en cualquier otro país, así como la información que indique la intención del solicitante en permanecer en el país.

¹⁹ **Artículo 15.-** Serán atribuciones de la Coordinación las siguientes:

- X. Llevar un registro actualizado de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria;

²⁰ **Artículo 85.-** Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, el refugiado requiera de los servicios consulares de su país de origen para la obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos y demás actos administrativos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley, la Coordinación apoyará al refugiado para ejercer su derecho a no acudir a las autoridades del gobierno de su país, incluyendo la posibilidad de no solicitar la apostilla o legalización de documentos.

Para tal efecto, la Coordinación realizará gestiones ante las dependencias competentes en los trámites y servicios que el refugiado esté solicitando, tales como registro civil, servicios educativos y de seguridad social, así como cualquier otro programa público que busque facilitar su integración al país.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- Finalmente, se solicitó notificar a la quejosa para que continúe el procedimiento correspondiente ante la COMAR y, una vez realizada la modificación, acuda a las oficinas de la Dirección de Regulación Migratoria del INM para concluir su trámite y obtener su nuevo documento migratorio.
8. En el informe justificado, se incluyeron como anexos diversos oficios entre autoridades de los cuáles podemos desprender lo siguiente.
- **El oficio ******* de fecha 28 de julio de 2021. El INM –a través de su Director General de Regulación y Archivo Migratorio– dio a conocer a la COMAR sobre el escrito de la quejosa “mediante el cual solicitó el cambio de datos de identificación conforme a su identidad de género en la tarjeta de residencia permanente”. Asimismo señaló lo siguiente:

“Con fundamento en los artículos 124 fracción II inciso b) y 130 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, a efecto de salvaguardar el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de la persona extranjera de mérito, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracciones IV y V de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, solicito su apoyo, a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se le brinde el apoyo necesario y se señale el procedimiento que deberá seguir la persona extranjera para que se modifiquen los datos requeridos dentro de la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado y en su momento, pueda ingresar los trámites migratorios correspondientes, y encontrarnos en la posibilidad de emitir el documento migratorio con los datos solicitados”.
 - **El oficio ******* de fecha 21 de septiembre de 2021 que tiene como asunto “seguimiento a oficio ***** dirigido nuevamente a la COMAR por el que el INM –a través del Director General de Regulación y Archivo Migratorio– solicita “conocer el estado que guarda la solicitud de referencia”.
 - Un correo electrónico enviado el 28 de septiembre de 2021 por parte del Director Jurídico de la COMAR con asunto “respuestas a oficios 3368 y 4410” en el que se le informa al Director General de Regulación y Archivo Migratorio del INM que se dio atención a su solicitud a través del oficio *****.
 - **El oficio ******* de fecha 28 de septiembre de 2021 firmado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la COMAR y

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

dirigido al Director General de Regulación y Archivo Migratorio del INM en el que informa:

- “1. En términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados adoptará las medidas que estén a su alcance para que los solicitantes, los refugiados y quienes reciban protección complementaria, no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos.
 2. Conforme a los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, esta autoridad tiene entre sus atribuciones informar al refugiado sobre sus derechos y obligaciones, asimismo, le orientará sobre los programas y servicios públicos para atender sus necesidades inmediatas, aunado a que se podrán realizar las entrevistas al refugiado para conocer sus necesidades y determinar la asistencia institucional que se le otorgará.
 3. En tal virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, se solicita su valiosa colaboración a efecto de que se le informe a la persona extranjera de referencia, que deberá presentarse ante las Oficinas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Dirección de Atención y Vinculación Institucional, ubicada en Versalles 49, piso 3, Colonia Juárez C.P. 06600, Alcaldía Cuahutémoc, Ciudad de México, en un horario de 9:00 am a 18:00 horas, con la finalidad de que sea recabada su petición, en su caso se le puedan realizar las entrevistas a que haya lugar y poder determinar la asistencia institucional que se le otorgará”.
- Un correo electrónico del 30 de septiembre de 2021 enviado de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio del INM a la quejosa ***** en el que se le comunica sobre el oficio número *****.
 - El oficio ***** de fecha 30 de septiembre de 2021 (acto reclamado) dirigido a la quejosa ***** por parte del Director General de Regulación y Archivo Migratorio. En éste se le informa sobre las comunicaciones que ha tenido con la COMAR. Asimismo, se le hace llegar la información sobre la necesidad de acudir a las instalaciones de la COMAR “con la finalidad de que sea recabada su

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

petición, en su caso se le pueda orientar sobre los trámites correspondientes, o bien, se le puedan realizar las entrevistas a que haya lugar y poder determinar la asistencia institucional que se le otorgará.” También se le señala lo siguiente:

“Una vez que sea atendida por la COMAR y se emita la constancia correspondiente, le solicitamos ponerse en contacto con la Directora de Regulación Migratoria [datos de contacto] con la finalidad que se le asigne cita para su atención. Por otra parte, le informo que a fin de realizar los cambios pertinentes en su documentación migratoria, la vía de acceso es a través de los trámites migratorios que se encuentran previstos en los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, siendo estos 1) notificación de cambio de nombre 2) reposición de documento migratorio.

Por lo que respecta a su solicitud de conformidad con lo preceptuado por el artículo 3 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, dicha petición se debe llevar a cabo a través del trámite migratorio correspondiente, con las formalidades y en el lugar que para ello se establecen dentro de cada una de las fichas de trámite, así como presentado los documentos que acrediten los requisitos para el trámite que corresponda, es decir, que resulta necesario realizar el llenado de la solicitud de trámite en línea, entregar los documentos que acrediten los requisitos correspondientes, así como presentar el trámite migratorio ante una oficina de atención a trámites del Instituto Nacional de Migración.

Para la notificación de cambio de nombre, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 56 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, deberá presentar los siguientes requisitos:

1. Solicitud de trámite, llenado a través de la siguiente liga electrónica <https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html> con firma autógrafa de la persona solicitante.
2. Carta firmada por la persona extranjera en la que bajo protesta de decir verdad manifieste el cambio de nombre y género señalando expresamente el anterior y el nuevo dato que corresponda, se adjunta formato para mayor referencia.
3. Original y copia de la tarjeta de residente;
4. Documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR) en la que conste el otorgamiento de la condición de refugiado a nombre de *****.

*Se adjunta ficha de trámite de notificación de cambios, para mayor referencia.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

En cuanto a trámite de reposición de documento migratorio, el artículo 35 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios establece los siguientes requisitos:

1. Solicitud de trámite, deberá ser llenada a través de la siguiente [líga electrónica](https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html) <https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html> con firma autógrafa.
2. Copia del documento emitido por COMAR en el que obre el reconocimiento de la condición de refugiado con los datos de identidad de la persona extranjera.
3. Documento migratorio, en su caso la tarjeta de residente permanente”

*Se adjunta ficha de trámite de expedición de documento por reposición, para mayor referencia

Resulta importante mencionar que, las personas extranjeras que obtengan de la Secretaría de Gobernación a través de la COMAR, el reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de Protección Complementaria, no pagarán derechos migratorios, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 18-B de la Ley Federal de Derechos.

Por otra parte, le comento que es fundamental que el trámite migratorio lo presente de manera personal, ya que una vez que éste se resuelva, la autoridad migratoria recabará los datos biométricos, es decir, la toma de guellas y fotografías, para la expedición del documento migratorio correspondiente.

Por otra parte, le comento que para la modificación a la Clave Única de Registro de Población, respecto del carácter 11º, ésta se realizará una vez que se resuelva el trámite migratorio de reposición de documento migratorio y en el mismo acto se realizará la adecuación en el Registro Nacional de Extranjeros.”

- **Oficio ******* de fecha 29 de octubre de 2021, por medio del cual la COMAR –a través de su Director de Atención y Vinculación Institucional– dio a conocer al titular de la Dirección General del Registro Civil de la situación de la quejosa y de la solicitud de cambios en sus datos de identidad. Al respecto se indicó lo siguiente:

“Hago referencia al caso del extranjero ***** de nacionalidad GUATEMALTECA, quien fue reconocido como refugiado mediante resolución de fecha 18 de marzo de 2020, según consta en los archivos de esta institución. Ahora bien, hago referencia al escrito libre presentado ante esta Coordinación General el **21 de octubre de 2021**, por medio del cual solicita se realicen cambios a sus datos

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

de identidad, específicamente a su nombre, ya que socialmente se ostenta como *****” (...)

“me permito solicitar su valiosa colaboración, a fin de señalar el procedimiento administrativo que debe realizarse para obtener la adecuación del nombre, a la identidad y género de una persona extranjera, tomando en consideración la imposibilidad de regresar a su país de origen o tener contacto con su representación consular. Lo anterior con la finalidad de orientar a la persona, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”.

Estos oficios y comunicaciones se sintetizan en la siguiente tabla. El que constituye el acto reclamado se resalta para su mayor claridad.

Fecha	Oficio	Emisor	Destinatario	Contenido Relevante
28 de julio de 2021 *****		INM Director General de Regulación y Archivo Migratorio	COMAR	Informa sobre solicitud de cambio de datos de identificación conforme a identidad de género en tarjeta de residencia permanente. Solicita apoyo “a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se le brinde el apoyo necesario y se señale el procedimiento que deberá seguir la persona extranjera para que se modifiquen los datos requeridos dentro de la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado y en su momento, pueda ingresar los trámites migratorios correspondientes”
21 de septiembre de 2021 *****		INM Director General de Regulación y Archivo Migratorio	COMAR	Seguimiento al oficio anterior. Solicita “conocer el estado que guarda la solicitud de referencia”
28 de septiembre de 2021 Correo electrónico		COMAR Director Jurídico	INM Director General de Regulación y Archivo Migratorio	Asunto: “respuestas a oficios 3368 y 4410”. Informa que se dio atención a solicitud a través del oficio *****
28 de septiembre de 2021		COMAR	INM	Cita obligación de no discriminación del artículo 8 de la Ley sobre Refugiados. Establece que sus atribuciones incluyen

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

*****	Subdirector de Asuntos Jurídicos y Transparencia	Director General de Regulación y Archivo Migratorio	<p>informar y orientar al refugiado en el ejercicio de sus derechos.</p> <p>Solicita que se informe a la persona extranjera que “deberá presentarse ante las Oficinas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (...) con la finalidad de que sea recabada su petición, en su caso se le puedan realizar las entrevistas a que haya lugar y poder determinar la asistencia institucional que se le otorgará”</p>
30 de septiembre de 2021 Correo electrónico	INM Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio	*****	Comunica el oficio *****
30 de septiembre de 2021 *****	INM Director General de Regulación y Archivo Migratorio	*****	<p>Informa sobre comunicaciones con COMAR. Instruye acudir a COMAR para mayor orientación sobre el trámite.</p> <p>Establece que “una vez que sea atendida por la COMAR y se emita la constancia correspondiente” podrá contactar al INM para continuar con el trámite de modificación a su tarjeta de residencia permanente. Detalla procedimientos disponibles: 1) notificación de cambio de nombre, 2) reposición de documento migratorio. Para cambio de nombre requiere: solicitud en línea, carta bajo protesta, tarjeta de residente, y “Documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR) en la que conste el otorgamiento de la condición de refugiado a nombre de *****”</p>
29 de octubre de 2021 *****	COMAR Director de Atención y Vinculación Institucional	Titular de la Dirección General del Registro Civil	<p>Hace referencia al caso de “***** de nacionalidad GUATEMALTECA, quien fue reconocido como refugiado (...) por medio del cual solicita se realicen cambios a sus datos de identidad, específicamente a su nombre, ya que socialmente se ostenta como *****”.</p> <p>Solicita colaboración “a fin de señalar el procedimiento administrativo que debe realizarse para obtener la adecuación del nombre, a la identidad y género de una persona extranjera, tomando en consideración la imposibilidad de regresar a su país de origen o tener contacto con su</p>

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

			representación consular”
--	--	--	--------------------------

9. **Trámite y sentencia de amparo indirecto.** La demanda de amparo fue de conocimiento del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien lo registró con número **1386/2021**. Una vez integrado el expediente, celebró la audiencia constitucional el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Posteriormente, el juzgado remitió el juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, quien mediante sentencia de veintidós de abril de dos mil veintidós determinó **sobreseer en el juicio de amparo** por los siguientes motivos:

- Respecto de los artículos 126 a 138 de la Ley de Migración estos únicamente establecen las facultades y/o atribuciones de la autoridad migratoria para llevar a cabo el procedimiento administrativo en materia de regulación migratoria en el país, facultades para resolver la solicitud de la parte quejosa de modificar o expedir sus documentos.
- Por lo tanto estos no encuadran en los supuestos antes referidos para considerar que son estigmatizantes, pues en estos ni se hace referencia al género de las personas migrantes que se someten a su potestad, sino que únicamente se refieren a los trámites y actuaciones que se relacionan con las personas migrantes. El objeto de la norma es establecer el procedimiento administrativo para regular la cuestión migratoria y las solicitudes elevadas por los extranjeros.
- Por lo tanto determina que no se puede considerar que con ellas se genera un daño estigmatizador por discriminación y señala que la afectación que pueda sufrir la parte quejosa por su emisión no es indirecta ni colateral, sino que necesariamente debe ser directa. Es decir, clasifica la norma como heteroaplicativa, pues requiere de un acto de aplicación. Con base en lo anterior determina que la parte quejosa carece de interés legítimo en su causa a pedir.
- Por otro lado, destaca que si bien la norma también se reclama con motivo del primer acto concreto de aplicación, identificando como acto de aplicación el oficio ***** pues la impugnación de la norma se hace a partir de dicho oficio, esta fue presentada de manera extemporánea.
- Previo al cálculo del plazo señala que aun cuando en la demanda se haya manifestado que las normas reclamadas se impugnan como normas autoaplicativas bajo la figura del interés legítimo y también con motivo del primer acto de aplicación, esto no puede acontecer pues al

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

existir dos plazos se atenta contra las reglas de procedencia. De ahí que se tiene como reclamadas a las normas con motivo del primer acto concreto de aplicación.

- Al tenerse como reclamadas las normas con motivo de su primer acto de aplicación el oficio del Instituto Nacional de Migración, el plazo para promover el amparo es de quince días desde la notificación del oficio reclamado. A su juicio, la demanda es extemporánea pues el acto fue notificado mediante correo electrónico el treinta y uno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo transcurrió del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Por lo que al haberse presentado la demanda el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la demanda es extemporánea.

10. **Recurso de revisión.** Inconforme, mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la quejosa interpuso recurso de revisión. Tocó conocer del asunto al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el número de expediente **302/2022**. En su recurso, la recurrente expone las agravios siguientes:

- **Primero.** Señala que le causa agravio la sentencia, debido a que el juzgado interpretó de forma incorrecta la discriminación y estigmatización que padecen las personas trans extranjeras. En la sentencia recurrida el Juzgado sostuvo que la estigmatización únicamente se realiza a través de señalamientos discriminatorios específicos, sin considerar que la invisibilización y exclusión normativa absoluta representa también estigmatización al implicar que la forma de vida de toda la población trans no es válida y, por ende, no merece consideración por parte del derecho.
- Señala que las normas reclamadas al establecer un procedimiento para la regularización y expedición de documentos de condición de estancia e identidad para personas extranjeras que solo es funcional para las personas cisgénero y no permiten la emisión de los documentos conforme a la identidad de género distinta a la asignada al nacer, estas excluyen de sus efectos y necesaria protección a las personas trans.
- No obstante lo anterior, el Juzgado de Distrito en la sentencia recurrida determinó que la norma no era discriminatoria pues: a) no hace señalamientos degradantes contra las personas trans por su “condición sexual”; b) no genera efectos directos, ya que la ley solo establece facultades y/o atribuciones a las autoridades migratorias; y c) la alegada carga discriminatoria corresponde a las impresiones subjetivas de la quejosa, pero no se apoya en elementos objetivos.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- Lo anterior, a juicio de la recurrente es un análisis deficiente sobre la conceptualización de la discriminación y estigmatización, así como de la naturaleza particular que tiene el estigma que viven las personas trans y, por ende, del deficiente entendimiento de la naturaleza estigmatizante de la dimensión valorativa de la norma.
- Señala que, tratándose de personas trans, el no contar con mecanismos legales para gozar del reconocimiento legal de su identidad de género es un indicador de su estigmatización y, a la vez, un mecanismo que perpetúa esa posición de desventaja social.
- Aduce que las normas reclamadas refuerzan un mensaje de estigmatización en el que se expresa implícitamente que solo merecen protección legal y reconocimiento las personas migrantes cisgénero, por lo que emiten un mensaje discriminatorio en su dimensión valorativa, el cual debió ser puesto bajo escrutinio por el *A quo*.
- **Segundo.** Por otra parte, señala que el sobreseimiento del amparo en lo que respecta al acto de aplicación de las normas reclamadas le causa agravio, puesto que el *A quo* erróneamente determinó que se presentó fuera de plazo. A su juicio, el *A quo* decidió bajo la suposición de que el acto reclamado se notificó dos días antes de lo señalado por la quejosa, sin que corroborara la recepción efectiva de la comunicación alegada y, sin que la autoridad controversiara o desvirtuara que la recepción se diera tal como mostró la quejosa.
- Contrario a lo resuelto por el juzgado de distrito, señala que el acto reclamado le fue notificado por correo electrónico el dos de octubre de dos mil veintiuno, de tal forma que la demanda sí fue presentada dentro del plazo de quince días establecido por la Ley.
- Señala que el *A quo* ignoró que tal como lo marca la jurisprudencia, tratándose de notificaciones realizadas por correo electrónico, el acto

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

de notificación se relaciona con la recepción o “conformación de entrega” de correo y no meramente con un señalamiento de su aparente envío. De manera que, para desvirtuar que la recepción del correo se dio en las fechas señaladas por la quejosa, correspondía a la autoridad comprobar, en el momento procesal oportuno que la recepción del correo y la “confirmación de entrega” se dieron el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Comprobación que no fue dada por las autoridades señaladas como responsables.

11. **Solicitud reasunción de competencia 192/2022.** Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el autorizado de la quejosa, solicitó a este Alto Tribunal que reasumiera su competencia originaria para conocer del amparo en revisión 302/2022 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
12. En sesión privada de ocho de febrero de dos mil veintitrés, ante la falta de legitimación de la parte solicitante, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de reasunción de competencia para conocer del amparo en revisión.
13. En sesión de diez de mayo de dos mil veintitrés la Primera Sala resolvió reasumir su competencia originaria para conocer del amparo en revisión 302/2022 por considerar que el asunto reviste del interés y trascendencia necesarios para la reasunción de competencia originaria.
14. **Trámite ante la Suprema Corte.** Mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia dio trámite al asunto, ordena registrar el amparo en revisión con el número 512/2023 y lo turnó a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de esta Primera Sala, para la elaboración del proyecto correspondiente. Posteriormente, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la presidencia de esta Primera Sala se abocó al

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

conocimiento del asunto, tuvo por recibidas todas las constancias y ordenó el envío de los autos a la ponencia respectiva.

II. COMPETENCIA, OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

15. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente amparo en revisión²¹, el cual se interpuso de forma oportuna²² y por parte legitimada²³.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO.

16. El recurso de revisión es procedente de conformidad con el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues se interpuso contra una sentencia dictada en una audiencia constitucional por un juez de distrito.

IV. ESTUDIO DE AGRAVIOS

17. La revisión en amparo indirecto tiene como objeto principal analizar los agravios formulados en contra de la sentencia emitida por el juzgado de distrito. En esta sección, se debe determinar si fue acertada la decisión de

²¹ Conforme a los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 80 Bis de la Ley de Amparo; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada en relación con el artículo tercero transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 1/2023, de 26 de enero de 2023 y modificado el 10 de abril siguiente, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito.

²² La sentencia de amparo indirecto, dictada el 22 de abril de 2022, le fue notificada vía electrónica a la parte quejosa el 16 de mayo de 2022, por lo que surtió sus efectos el 17 de mayo de 2022. Así el plazo de oportunidad para presentar el recurso de revisión transcurrió del 18 al 31 de mayo de 2022, descontando los días 21, 22, 28 y 29 del mismo mes y año, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El recurso de revisión fue interpuesto vía electrónica el 27 de mayo de 2022. Por lo anterior, se concluye que el recurso de revisión se presentó de manera oportuna, de conformidad con el primer párrafo del artículo 86 de la Ley de Amparo.

²³ El recurso fue interpuesto por ***** , autorizado de la parte quejosa, en el juicio de amparo indirecto 1386/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

sobreseer en el juicio²⁴, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV²⁵ de la Ley de Amparo, es decir, el consentimiento tácito de normas generales y actos de aplicación por no promover el juicio en el plazo legal previsto.

18. En este caso, el juez de distrito sobreseyó en el juicio conforme al siguiente argumento. Primero, consideró que la quejosa hizo valer una afectación autoaplicativa respecto al Capítulo IX de la Ley de Migración – relativo al Procedimiento Administrativo Migratorio en materia de Regulación Migratoria—. La quejosa alegó que dicha normativa era estigmatizante, ya que omitía regular el procedimiento para reconocer legalmente la identidad de género para personas extranjeras trans en sus documentos migratorios.
19. Sin embargo, el juez consideró que este capítulo sólo establece facultades administrativas para los trámites de regularización migratoria. No contiene disposiciones que, por sí solas, generen una afectación o discriminación. En todo caso –señaló– por la naturaleza de las normas, en atención a la causa de pedir, se pueden tener como reclamadas respecto al primer acto de aplicación.
20. Ahora bien, respecto de dicho acto de aplicación –esto es, el oficio impugnado–, el juez concluyó que la demanda fue presentada de forma extemporánea. Si el oficio fue notificado vía correo electrónico el 30 de septiembre de 2021, los efectos legales de dicha notificación comenzaron a correr el 1 de octubre siguiente. Por lo tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del 4 al 25 de octubre de 2021. Al haberse

²⁴ Conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo

Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

²⁵ Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

promovido la demanda el 26 de octubre, el juzgado determinó que su presentación fue fuera del plazo legal establecido.

21. En su recurso, la quejosa sostiene, en primer lugar, que el juez de distrito no comprendió adecuadamente la estigmatización que enfrenta la población trans como consecuencia de su exclusión en el marco normativo. Afirma que esta omisión o exclusión constituye un acto de discriminación interseccional y una forma de invisibilización hacia las personas trans extranjeras y refugiadas, vulnerando los derechos reconocidos en la Constitución. Además, señala que, respecto al acto reclamado, fue incorrecto considerar extemporánea la presentación de su demanda de amparo.
22. Esta Primera Sala analizará los agravios planteados en dos partes. Primero, se abordará la incorrecta calificación de extemporaneidad en la presentación del amparo frente al oficio reclamado (A). Después, se examinará el agravio relacionado con la falta de comprensión sobre la estigmatización que genera la exclusión normativa de la población trans refugiada, el cual nos permitirá precisar los actos reclamados y la materia de la litis (B). En esencia, como se argumentará a continuación, los agravios son **parcialmente fundados** y suficientes para levantar el sobreseimiento decretado.

A. La incorrecta determinación de la extemporaneidad de la demanda de amparo

23. En este caso, el primer punto a resolver es uno de oportunidad. Respecto al oficio reclamado, ¿fue presentada la demanda de amparo en tiempo? Esta pregunta implica determinar cuándo se entiende realizada una notificación por correo electrónico y cuándo surte efectos.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

24. En su segundo agravio, la recurrente expresa que el juzgado auxiliar incorrectamente toma como fecha de notificación del oficio ***** el 30 de septiembre de 2021. Bajo protesta de decir verdad, afirma que dicho acto le fue notificado mediante correo electrónico recibido el 2 de octubre de ese mismo año. En consecuencia, argumenta que el plazo legal de quince días para la presentación del juicio de amparo comenzó a correr a partir del 4 de octubre y concluyó el 26 de octubre de 2021. Destaca que incluso la Jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda y le dio trámite, lo cual refuerza la razonabilidad de su planteamiento.
25. Además, en sus agravios señala que en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables no se controvertió la fecha de notificación del acto reclamado, ni se formuló objeción alguna respecto del cumplimiento del plazo para la presentación de la demanda. En otras palabras, afirma que la notificación del acto no fue un hecho controvertido en la litis. Por tanto, considera que la posterior determinación judicial de extemporaneidad, sin haber sido objeto de debate en el procedimiento, vulneró su derecho de defensa, al privarla de la posibilidad de desvirtuar esa consideración procesal en el momento oportuno.
26. Agrega, además, que el sobreseimiento decretado no se ajustó a las reglas aplicables a las notificaciones electrónicas, en particular aquellas que establecen que la fecha de recepción debe considerarse como el momento en que se realiza efectivamente la notificación. Sostiene que tomar en consideración la fecha de envío del correo electrónico afectó directamente su derecho de acceso a la justicia, ya que impidió que pudiera impugnar el acto al conocer de su contenido y que se analizara el fondo sobre las violaciones a sus derechos humanos y los actos de discriminación alegados.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

27. Este agravio resulta **fundado**. La manifestación bajo protesta de decir verdad establece que la recurrente conoció el oficio el 2 de octubre de 2021. Ante la ausencia de constancia que acredite la recepción fehaciente, esta fecha debe considerarse como el momento efectivo de conocimiento. Más importante aún, privilegiar la recepción sobre el envío no solo es consistente con el marco normativo aplicable, sino que constituye la única interpretación compatible con los principios constitucionales de debido proceso y acceso efectivo a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad como las refugiadas.
28. El fundamento normativo es claro. El artículo 18 de la Ley de Amparo²⁶ establece que el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo inicia al día siguiente de que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto. En este caso, conforme al artículo 77 de la Ley de Migración²⁷, el procedimiento administrativo migratorio se rige por lo contenido en la ley, en el reglamento o en las disposiciones administrativas generales que se emitan. El artículo 203, fracción IV²⁸ del Reglamento de la Ley de Migración dispone que las notificaciones pueden realizarse por medios electrónicos, siempre que la persona promovente lo haya aceptado expresamente y pueda comprobarse fehacientemente su **recepción**.

²⁶ **Artículo 18.** Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la persona quejosa del acto o resolución que reclame o a aquella en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.

²⁷ **Artículo 77. (Ley de Migración)** El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes.

²⁸ **Artículo 203.** Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y solicitudes de informes o documentos podrán realizarse:

I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;

II. Por oficio, entregado por mensajería o correo certificado, con acuse de recibo;

III. Por edictos, y

IV. Mediante medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio cuando así lo hubiere expresado el interesado y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos.

La autoridad migratoria podrá comisionar personal para que realice las diligencias establecidas en este artículo.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

29. De igual manera, si acudimos a las reglas generales del procedimiento administrativo, el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo²⁹ mantiene una redacción similar y señala que las notificaciones pueden realizarse “mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, **con acuse de recibo**” o por medios de comunicación electrónica siempre que pueda comprobarse fehacientemente la **recepción** de los mismos.
30. Esta preferencia normativa por la recepción, y no simplemente por el envío, responde a una lógica jurídica fundamental: garantizar el conocimiento efectivo del acto administrativo. Esta lógica encuentra sustento en el principio de seguridad jurídica, el cual exige que el cómputo de los plazos procesales inicie únicamente a partir del momento en que el destinatario tiene certeza sobre el contenido del acto que le afecta.
31. La determinación de la fecha exacta de recepción del correo electrónico como punto de partida del cómputo también es una exigencia del debido proceso. La recepción representa el momento preciso en que se materializa el conocimiento real y efectivo del acto administrativo por parte de la persona destinataria. Este conocimiento es indispensable para que pueda ejercer sus derechos procesales de manera informada y oportuna, ya que es hasta ese momento cuando está en posibilidad de comprender y, en su caso, impugnar el contenido del acto.
32. Esta Suprema Corte ha reconocido esta lógica en casos análogos. En la jurisprudencia 2a./J. 159/2016³⁰, la Segunda Sala validó la

²⁹ **Artículo 35.-** Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: (...)

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y (...)

³⁰ Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 722, registro digital 2012936, de rubro y texto: “REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LA NOTIFICACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

constitucionalidad del buzón tributario para notificaciones fiscales precisamente porque genera un acuse de recibo electrónico que permite al contribuyente “conocer con certeza el momento en el que le fue notificada la resolución definitiva, a fin de impugnarla oportunamente”. Esta certeza constituye un presupuesto esencial del debido proceso administrativo.

33. Computar plazos desde el envío –como hizo el juez auxiliar– no sólo es jurídicamente inadecuado, sino que vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia. Implica exigir el cumplimiento de cargas procesales desde un momento en que la persona materialmente no podía defenderse por desconocer la existencia del acto que afecta sus derechos.
34. Esta problemática se agrava tratándose de personas refugiadas, quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como ya hemos reconocido en la jurisprudencia 1ª./J. 78/2022 (11a)³¹. Estas personas suelen enfrentar barreras estructurales adicionales, tales como una legítima desconfianza hacia las figuras de autoridad derivada de contextos de persecución, dificultades idiomáticas que les impiden comprender de

A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO DE LOS ACTOS SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. El precepto aludido, al prever que todos los actos y resoluciones emitidas durante el desarrollo del procedimiento de revisión electrónica se notificarán a través del buzón tributario, no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, ya que el artículo 134 del propio ordenamiento tributario expresamente señala que los actos administrativos susceptibles de impugnarse podrán notificarse por ese medio, caso en el cual, la notificación se tendrá por realizada cuando se genere el acuse de recibo electrónico "en el que conste la fecha y hora en el que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar", de lo que se sigue que el contribuyente puede conocer con certeza el momento en el que le fue notificada la resolución definitiva, a fin de impugnarla oportunamente, razón por la cual, tampoco viola el derecho de acceso efectivo a la justicia."

³¹ Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4162, registro digital: 2024782, de rubro y criterio: "DERECHO A BUSCAR Y RECIBIR ASILO. LA CONDICIÓN DE REFUGIADO ES DECLARATIVA Y NO CONSTITUTIVA Y, POR LO TANTO, LAS PERSONAS SOLICITANTES DE REFUGIO REQUIEREN PROTECCIÓN REFORZADA, INCLUSO ANTES DE QUE EL ESTADO LES RECONOZCA SU ESTATUTO. (...) Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que uno de los principios generales del derecho a buscar y a recibir asilo es que la condición de persona refugiada es declarativa y no constitutiva. Es decir, una persona es refugiada y tiene una situación de mayor vulnerabilidad por lo que ha vivido y no por el hecho de que se le reconozca como tal. Por lo tanto, merece una protección reforzada incluso antes de que el Estado le reconozca su estatuto y durante todo el procedimiento encaminado a ese resultado. De ahí que el Estado esté obligado a no dejar a los solicitantes de asilo en una condición desprovista de derechos mientras esperan la resolución de sus solicitudes." En este sentido, las condiciones de vulnerabilidad no desaparecen con el reconocimiento de la condición de refugiado, como sucede en el presente caso.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

inmediato comunicaciones oficiales complejas, limitaciones para acceder a asesoría legal oportuna, y condiciones precarias en el acceso a medios electrónicos, entre otros. Por tanto, privilegiar la fecha de recepción como punto de partida para el cómputo de plazos no sólo es la solución prevista por la ley, sino que constituye una medida constitucionalmente necesaria para garantizar el acceso efectivo a la justicia en condiciones reales de igualdad.

35. Un elemento adicional refuerza esta conclusión. En el correo en que se dio a conocer el contenido del oficio reclamado –con número *****– la propia autoridad solicitó a la quejosa expresamente “acusar la recepción del presente oficio”. Esta solicitud constituye un reconocimiento institucional de que se requiere la confirmación de que el acto efectivamente llegó al conocimiento de la persona interesada para que surta efectos.
36. En el presente caso, si bien no se cuenta con un acuse electrónico de recibido ni con una constancia tecnológica que de forma automática pueda revelar el momento exacto en que la quejosa conoció del acto, la manifestación bajo protesta de decir verdad constituye el único elemento probatorio para acreditar el conocimiento efectivo del contenido del oficio que reclama. Crucialmente, si bien la oportunidad es un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio, ante las condiciones probatorias es relevante que esta manifestación no fue controvertida por las autoridades responsables.
37. Así, al existir una norma específica que privilegia la lógica de la recepción y dado que se tiene una manifestación bajo protesta de decir verdad del conocimiento del correo electrónico el 2 de octubre de 2021, es ese momento el que debe considerarse como fecha de notificación para todos los efectos legales.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

38. Resuelto lo anterior, debemos determinar cuándo surte efectos esta notificación. Dado que ni la normativa migratoria ni la administrativa lo precisan expresamente, debe aplicarse lo dispuesto en el párrafo final del artículo 8 BIS de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios³², el cual remite supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles. Conforme a su artículo 321³³, las notificaciones surten efectos al día siguiente de aquel en que se practiquen.
39. El cálculo de oportunidad, entonces, corresponde justamenta a lo alegado en la revisión: si la quejosa recibió el correo electrónico el sábado 2 de octubre, la notificación surtió efectos el lunes 4. El plazo de quince días para promover el amparo transcurrió del 5 al 26 de octubre de 2021. La presentación de la demanda el 26 de octubre fue oportuna, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, **se revoca el sobreseimiento decretado por el juez de distrito.**
40. Finalmente, advertimos que el juez de distrito subordinó el análisis de las normas reclamadas –las contenidas en el Capítulo IX de la Ley de Migración– a su aplicación concreta mediante el oficio emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, la recurrente argumenta que esta consideración desconoce la dimensión estigmatizante e inmediata de las normas impugnadas, cuya sola existencia proyecta un juicio de valor que afecta directamente su derecho a la identidad. Por ello, y aún cuando ya se ha considerado procedente el levantamiento del sobreseimiento, resulta necesario examinar este agravio a fin de delimitar con precisión el acto reclamado que será objeto de estudio; si, efectivamente, las normas impugnadas fueron aplicadas y si se

³² **Artículo 8 BIS.** Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas, podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
(...)

En todo lo no previsto en el presente artículo, se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

³³ **Artículo 321.** Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practiquen.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

impugnaron con relación a ese acto de aplicación. De ello nos ocuparemos a continuación.

B. Carácter autoaplicativo de la exclusión normativa: la incorrecta precisión del acto reclamado.

41. La quejosa planteó desde su demanda inicial un reclamo claro. Impugna el capítulo IX de la Ley de Migración (artículos 126 a 137) por excluir discriminatoriamente a las personas trans de la protección migratoria, en específico, del reconocimiento legal de la identidad de género en sus documentos³⁴. Para la quejosa, cuando una persona trans extranjera busca en el orden jurídico mexicano un mecanismo para obtener documentación migratoria que corresponda a su identidad de género, se enfrenta a una realidad excluyente y estigmatizante: no hay disposición o norma que lo permita. Esta realidad –considera– activa una afectación autoaplicativa que le otorga interés legítimo para impugnar las leyes que le excluyen.
42. El juez de distrito estimó, por un lado, que esto no era posible. Bajo su interpretación, las normas reclamadas sólo podían analizarse en función de su aplicación concreta y un interés jurídico, al regular facultades administrativas relacionadas con trámites migratorios. En ese sentido, sostuvo que la afectación que pudiera sufrir la parte quejosa a partir de estas normas únicamente se actualizaría cuando los trámites se lleven a cabo o las facultades se desplieguen respecto a su caso concreto, lo cual –estima– sucede en el oficio reclamado.

³⁴ La quejosa y recurrente señaló desde su demanda de amparo que reclama como actos del Poder Legislativo: “La discusión, aprobación y expedición del capítulo IX de la Ley de Migración (artículos 126 a 137), pues excluyen de forma discriminatoria a las personas transgénero de la protección que esta Ley otorga para la tramitación y expedición de documentos migratorios en México al no establecer apartado alguno que nos permita contar con documentación migratoria correspondiente a nuestra identidad de género”. De manera análoga, impugnó la promulgación de dicho capítulo como acto atribuible al Poder Ejecutivo.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

43. El juzgador añadió que las normas impugnadas “ni siquiera hacen referencia al género de las personas que se someten a su potestad”, y concluyó que no podía sostenerse que “la omisión de hacer distinción respecto a las personas transgénero implique una discriminación en los términos que refiere la promovente, pues aún cuando la norma se dirija a un grupo vulnerable, como son los migrantes, eso no significa que mediante aquéllas (sic) normas se construya una exclusión o degradación a estos por su condición (sic) sexual, por lo cual no se puede considerar que con ellas se genera un daño estigmatizador por discriminación”.
44. En sus agravios, la recurrente argumenta que el juzgador hizo un análisis deficiente en su resolución sobre la conceptualización de la discriminación y estigmatización, así como de la dimensión valorativa de las normas reclamadas. Sostiene que en la sentencia se dejó de considerar que el capítulo de la Ley de Migración sólo es funcional para las personas extranjeras cisgénero (ya que únicamente retoman la identidad asignada al nacer) y no permiten la emisión de documentos migratorios conforme a la identidad de género distinta, como requieren las personas trans. Por ello, reclama que las normas implícitamente excluyen de sus efectos y necesaria protección a las personas extranjeras trans.
45. La recurrente retoma las consideraciones de esta Primera Sala en el **amparo en revisión 152/2013**. En dicho precedente reconocimos que existen ciertas normas que son particularmente dañinas porque generan, perpetúan, promocionan o ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación de ciertas personas. Estas normas son entendidas como normas estigmatizantes, lo cual constituye un acto de discriminación proscrito constitucionalmente.
46. En el caso, la recurrente considera que la exclusión absoluta del reconocimiento de existencia de las personas trans en el sistema normativo que regula la documentación migratoria desconoce su existencia

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

como parte de la población migrante del país. Para ella, el que las personas trans no cuenten con mecanismos legales para gozar del reconocimiento de su identidad de género es tanto un indicador de su estigmatización como un mecanismo que perpetúa su posición de desventaja social.

47. Estos argumentos tienen, para la recurrente, tres pretensiones: primero, combatir la oportunidad. Al respecto, destacó que el reclamo de discriminación de las normas excluyentes hace procedente su análisis independientemente del momento en el que se presente el amparo, pues este tipo de discriminación se genera de momento a momento mientras la norma se encuentre vigente. Segundo, al indicar la naturaleza autoaplicativa de las normas, busca disociar su análisis del acto de aplicación concreto. Por último, busca precisar que las normas sobre trámites migratorios y la invisibilización legal sí pueden tener una dimensión valorativa susceptible de impugnación en amparo.
48. Ahora, le asiste la razón a la quejosa en el sentido de que esta Sala ha reconocido que las normas jurídicas poseen una doble dimensión: no sólo prescriben conductas y consecuencias en su parte dispositiva, sino que también transmiten mensajes valorativos que contribuyen a la construcción del significado social en una comunidad. Efectivamente, en el **amparo en revisión 152/2013**³⁵ sostuvimos que la dimensión expresiva del derecho implica que las leyes sancionan significados y los promueven mediante la regulación de la conducta humana, operando como instrumentos que pueden reforzar o combatir estereotipos y prejuicios sociales³⁶. En el precedente se reconoció de forma explícita que “la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en

³⁵ Resuelto por la Primera Sala en sesión de 23 de abril de 2014 por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (quienes se reservaron el derecho de formular voto concurrente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra y se reserva el derecho de formular voto particular.

³⁶ Véanse párrafos 85, 86, 88-81 del amparo en revisión 152/2013. Op cit.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos”³⁷.

49. Dicho precedente también sostiene que los mensajes contenidos en la parte valorativa de la norma no requieren ser explícitos, sino que pueden ser implícitos o condicionados por el contexto social que informa a la norma y su aplicación. Así, basta con que tal norma parta de una premisa para regular lo que se entiende como “normal”, en oposición a un ámbito de desprotección al que se somete a las necesidades o identidades de lo que implícitamente reputa como inferior o desmerecedor de la misma condición social.
50. Por lo mismo, se reconoce el argumento sobre que la población trans ha sido un grupo históricamente discriminado que se ha enfrentado a exclusión e invisibilización normativa. Esta invisibilización genera efectos perjudiciales en múltiples niveles: a nivel individual, puede impedir o dificultar el reconocimiento jurídico pleno de la identidad de género; a nivel social, refuerza la percepción de que las personas trans no merecen protección legal equivalente; y a nivel sistémico, perpetúa dinámicas excluyentes en el ordenamiento jurídico.
51. Sin embargo, la estructura del juicio de amparo exige algo más que la mera constatación abstracta de invisibilización normativa para justificar la intervención judicial³⁸. De ahí que, en la presente revisión, sea importante precisar la materia de impugnación y determinar si, en este caso era necesario acudir a una afectación autoaplicativa para atender la causa de pedir de la quejosa, o si esta podía estudiarse a partir del acto efectivamente reclamado, como sostuvo el juez de distrito.

³⁷ Véanse párrafos 88-81. *Ibid.*

³⁸ Por ejemplo, ésta puede materializarse como una omisión legislativa absoluta, para lo debe acreditarse que dicha omisión viola específicamente un mandato constitucional dirigido a los y las legisladoras. Adicionalmente, puede plantearse como la exclusión normativa discriminatoria de una disposición específica, entre otros mecanismos de litigio que permitan acreditar un interés jurídico o legítimo. .

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

52. Como se ha dicho ya, en su demanda de amparo, la quejosa señaló que las normas estigmatizantes por exclusión normativa son las contenidas en el Capítulo IX de la Ley de Migración, que regula el procedimiento administrativo migratorio en materia de regulación migratoria. Este capítulo comprende los artículos 126 a 137 y abarca diversos aspectos procedimentales: desde los requisitos para solicitar trámites migratorios hasta los plazos para su resolución, pasando por los supuestos de regularización migratoria y la expedición de permisos especiales, como se ve a continuación.

CAPÍTULO IX DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO EN MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA

Artículo 126. Las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y requisitos que se precisen en la Ley, el Reglamento y en otras disposiciones administrativas de carácter general.

Artículo 127. La solicitud de visa deberá presentarla personalmente el extranjero interesado en las oficinas consulares, con excepción de los casos de derecho a la preservación de la unidad familiar, oferta de empleo o razones humanitarias, que podrán tramitar en territorio nacional, en los términos establecidos en el artículo 41 de esta Ley.

Artículo 128. La autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites migratorios en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte se entenderá que es en sentido negativo.

Si el particular lo requiere, la autoridad emitirá constancia de tal hecho, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de expedición de la referida constancia.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Artículo 129. Las solicitudes de expedición de visa presentadas en las oficinas consulares deberán resolverse en un plazo de diez días hábiles.

Artículo 130. Si el interesado no cumple con los requisitos aplicables al trámite migratorio que solicita, la autoridad migratoria lo prevendrá conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y le otorgará un plazo de diez días hábiles a partir de que se le notifique dicha prevención para que subsane los requisitos omitidos. En caso de que no se subsanen los requisitos, se desechará el trámite.

Artículo 131. Los informes u opiniones necesarios para la resolución de algún trámite migratorio que se soliciten a otras autoridades deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales. En caso de no recibirse el informe u opinión en dicho plazo, el Instituto entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado.

Artículo 132. Los extranjeros tendrán derecho a solicitar la regularización de su situación migratoria, cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Que carezcan de la documentación necesaria para acreditar su situación migratoria regular;
Que la documentación con la que acrediten su situación migratoria se encuentre vencida, o
Que hayan dejado de satisfacer los requisitos en virtud de los cuales se les otorgó una determinada condición de estancia.

Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en territorio nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo al extranjero la condición de estancia que corresponda conforme a esta Ley.

Con independencia de lo anterior, tienen derecho a la regularización de su situación migratoria los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de persona mexicana o de persona extranjera con condición de estancia de residente;

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la representación legal o custodia de persona mexicana o extranjera con condición de estancia de residente;

Que el extranjero sea identificado por el Instituto o por autoridad competente, como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional;

Que se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido, y

Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes.

Artículo 134. Los extranjeros también podrán solicitar la regularización de su situación migratoria, salvo lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley, cuando:

Habiendo obtenido autorización para internarse de forma regular al país, hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, siempre y cuando presenten su solicitud dentro de los sesenta días naturales siguientes al vencimiento del período de estancia autorizado, o

Realicen actividades distintas a las que les permita su condición de estancia. Para el efecto anterior, deberán cumplir los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 135. Para realizar el trámite de regularización de la situación migratoria, el extranjero deberá cumplir con lo siguiente:

Presentar ante el Instituto un escrito por el que solicite la regularización de su situación migratoria, especificando la irregularidad en la que incurrió;

Presentar documento oficial que acredite su identidad;

Para el caso de que tengan vínculo con mexicano o persona extranjera con residencia regular en territorio nacional, deberán exhibir los documentos que así lo acrediten;

Para el supuesto de que se hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, deberán presentar el documento migratorio vencido;

Acreditar el pago de la multa determinada en esta Ley, y

Los previstos en esta Ley y su Reglamento para la condición de estancia que desea adquirir.

Artículo 136. El Instituto no podrá presentar al extranjero que acuda ante el mismo a solicitar la regularización de su situación migratoria.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Para el caso de que el extranjero se encuentre en una estación migratoria y se ubique en los supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de esta Ley, se les extenderá dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de que el extranjero acredite que cumple con los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, el oficio de salida de la estación para el efecto de que acudan a las oficinas del Instituto a regularizar su situación migratoria, salvo lo previsto en el artículo 113 en el que se deberá respetar el período de reflexión a las víctimas o testigos de delito.

El Instituto contará con un término de treinta días naturales, contados a partir del ingreso del trámite correspondiente, para resolver sobre la solicitud de regularización de la situación migratoria.

Artículo 137. El Instituto podrá expedir permisos de salida y regreso por un periodo determinado a los extranjeros que tengan un trámite pendiente de resolución que no haya causado estado.

El Instituto expedirá una orden de salida del país a los extranjeros, cuando:

Se desistan de su trámite migratorio;
El trámite migratorio le sea negado, y
Así lo solicite el extranjero.

En estos casos, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional en el plazo concedido por el Instituto y podrá reingresar de forma inmediata, previo cumplimiento de los requisitos que establece esta Ley.

53. Un análisis detallado de estos artículos revela que establecen fundamentalmente aspectos procedimentales: qué debe contener una solicitud de trámite migratorio, dónde debe presentarse, los plazos que tiene la autoridad para dictar resolución (veinte días hábiles para trámites generales, diez para visas consulares), las prevenciones en caso de incumplimiento de requisitos, y los diversos supuestos para solicitar la regularización de la situación migratoria³⁹.

³⁹ La fracción XXXIII, del artículo 3º de la Ley de Migración define al situación migratoria como la “hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas”.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

54. Los artículos 132 y 133, por ejemplo, definen quiénes tienen derecho a la regularización: desde extranjeros que carecen de documentación necesaria o la tienen vencida, hasta aquellos con vínculos familiares con mexicanos o residentes, víctimas de delitos, personas en situación de vulnerabilidad especiales, y menores de edad sujetos a procedimientos de sustracción y restitución internacional.
55. Coincidimos con el juez de distrito en que estas normas son, en su mayoría, de aplicación condicionada. Es cierto, esta Primera Sala ha reconocido que excepcionalmente pueden encontrarse normas generales heteroaplicativas que, por su estructura normativa interna, generan una afectación tan grave para nuestra democracia constitucional que pueden considerarse autoaplicativas⁴⁰. Sin embargo, este carácter excepcional exige un análisis riguroso que demuestre la presencia de elementos estigmatizantes específicos.
56. Aquí surge la cuestión central: resulta difícil constatar cómo de estas normas específicas se puede desprender un mensaje estigmatizante. Las normas estigmatizantes son aquellas que, independientemente de establecer contenidos condicionados a un acto de aplicación, proyectan un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos. Estos sujetos resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma al incluir, por ejemplo, criterios vedados por el artículo 1° constitucional⁴¹.
57. Sin embargo, de las normas particulares del Capítulo IX no se extrae un mensaje objetivamente perceptible –explícito o implícito– que revele un juicio de valor negativo o estigmatizador. Al considerar elementos de contexto, símbolos utilizados, voluntad de los y las legisladoras, historia de

⁴⁰ Tesis 1a. XXXII/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 679, registro digital 2010971, de rubro “INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA”. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

⁴¹ *Ídem*.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

discriminación sufrida, o cualquier otro elemento relacionado, tampoco se desprende que dicho mensaje sea extraíble de estas normas específicas.

58. Igualmente significativo es que de estas normas no se desprende un criterio de clasificación proscrito constitucionalmente como categorías sospechosas. La Constitución prohíbe expresamente la discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra categoría que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades, entre ellas, identidad de género. Las normas directamente impugnadas, centradas en aspectos procedimentales como plazos de resolución, autoridades competentes, requisitos documentales y supuestos de regularización, no emplean ninguno de estos criterios proscritos de manera explícita o implícita.
59. Es importante precisar que el hecho de que las normas no mencionen específicamente las identidades de género diversas no significa que no puedan resultar estigmatizantes, discriminatorias por exclusión, o constituir una regulación discriminatoria por sus efectos indirectos. La invisibilización normativa puede generar afectaciones reales y significativas. Sin embargo, para efectos del análisis de autoaplicatividad en el juicio de amparo, los elementos jurisprudenciales específicos necesarios para acreditar la estigmatización no se encuentran presentes en las normas del Capítulo IX.
60. No obstante lo anterior, y tal como señaló el juez de distrito –aunque por razones distintas a las que aquí se exponen–, en el caso concreto no resulta necesario acudir argumentativamente a un interés legítimo en virtud de una afectación normativa autoaplicativa. Esta conclusión no se basa en una descalificación de las preocupaciones de la quejosa, sino en el reconocimiento de que existe un elemento revelador fundamental que

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

permite identificar con mayor precisión las normas específicas que materializan la afectación alegada.

61. El oficio ***** del INM constituye un acto de aplicación concreto que demuestra cuáles son las disposiciones del sistema migratorio que efectivamente inciden en la esfera jurídica de la parte quejosa y que dan cuenta de la exclusión e invisibilización normativa con efectos discriminatorios que impide adecuar su documento de identidad en México a su identidad de género. Las normas aplicadas, además, derivan del sistema regulatorio establecido en el artículo 126 de la Ley de Migración – disposición presente en el capítulo impugnado–, que dispone que las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y requisitos que se precisen en la Ley, el Reglamento y en otras disposiciones administrativas de carácter general.

62. El oficio impugnado establece lo siguiente en la parte que nos interesa:

“[...]

Por otra parte, le informo que a fin de realizar los cambios pertinentes en su documentación migratoria, la vía de acceso es a través de los trámites migratorios que se encuentran previstos en los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, siendo estos:

Notificación de cambio de nombre.

Reposición de documento migratorio.

Por lo que respecta a su solicitud de conformidad con lo preceptuado por el **artículo 3 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios**, dicha petición se debe llevar a cabo a través del trámite migratorio correspondiente, con las formalidades y en el lugar que para ello se establecen dentro de cada una de las fichas de trámite, así como presentando los documentos que acrediten los requisitos para el trámite que corresponda, es decir, que resulta necesario realizar el llenado de la solicitud de trámite en línea, entregar los documentos que acrediten los requisitos correspondientes, así como presentar el trámite migratorio ante una oficina de atención a trámites del Instituto Nacional de Migración.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Para la notificación de cambio de nombre, de conformidad con lo preceptuado por el **artículo 56 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios**, deberá presentar los siguientes requisitos:

Solicitud de trámite llenado a través de la siguiente liga electrónica:

<https://www.inm.gob.mx/tamites/publico/estancia.html> , con firma autógrafa de la persona solicitante.

Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de decir verdad manifiesta el cambio de nombre y género, señalando expresamente el anterior y el nuevo dato que corresponda, se adjunta formato para mayor referencia. Original y copia de la tarjeta de residencia.

Documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR) en la que conste el otorgamiento de la condición de refugiado a nombre de *****.

*Se adjunta ficha de trámite de notificación de cambios, para mayor referencia

En cuanto al trámite de reposición de documento migratorio, el **artículo 35 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios** establece los siguientes requisitos:

Solicitud de trámite, deberá ser llenada a través de la siguiente liga electrónica:

<https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html> con firma autógrafa.

Copia del documento emitido por COMAR en el que obre el reconocimiento de la condición de refugiado con los datos de identidad de la persona extranjera.

Documento migratorio, en su caso la tarjeta de residente permanente.

*Se adjunta ficha de trámite de expedición de documento migratorio por reposición, para mayor referencia.

[...]"

63. Asimismo, en el informe justificado del Instituto Nacional de Migración se señaló que el trámite migratorio que le corresponde a lo que solicita la quejosa se ampara en "la solicitud de notificación de cambio de nombre y reposición de documento, conforme a lo dispuesto en los **artículos 35, 55 y 56 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios**,

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

así como los requisitos previstos en el artículo 63, segundo párrafo, de la Ley de Migración y el artículo 167 de su Reglamento". Se señaló que estos preceptos son el fundamento para la modificación de los datos en el documento de identidad.

64. Un análisis preliminar de estas disposiciones revela aspectos fundamentales sobre qué tipo de modificaciones contempla el sistema migratorio mexicano en sus documentos de identificación. Las normas específicamente aplicadas establecen procedimientos para diferentes tipos principales de cambios: cambios de estado civil (matrimonio, divorcio), cambios de nacionalidad, cambio de domicilio y cambios de nombre. Sin embargo, surge una cuestión crítica: estos cambios están concebidos desde una perspectiva que no reconoce explícitamente las necesidades específicas de las personas trans extranjeras respecto a la concordancia entre su identidad de género y su documentación oficial migratoria, es decir, no permiten –en su lectura literal– modificar los demarcadores de género o sexo en sus documentos. Las normas se transcriben a continuación para mayor claridad.

LEY DE MIGRACIÓN

Artículo 63. El Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información relativa a todos aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de residente temporal o de residente permanente.

Los extranjeros tendrán la obligación de comunicar al Instituto de cualquier cambio de estado civil, cambio de nacionalidad por una diversa a la cual ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro de los noventa días posteriores a que ocurra dicho cambio.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN

Artículo 167. Las personas extranjeras residentes temporales y permanentes deberán notificar al Instituto,

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

dentro de los siguientes noventa días naturales a que ocurran, los cambios de estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo. Para ello, deberán presentar solicitud de trámite y los siguientes documentos:
Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste, según sea el caso, su nuevo domicilio o lugar de trabajo;
En el caso de cambio de estado civil, deberá presentar acta de matrimonio, sentencia de divorcio con fecha en que causó ejecutoria o acta de defunción del cónyuge, y
En el caso de cambio de nacionalidad, deberá presentar pasaporte de la nueva nacionalidad, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

LINEAMIENTOS PARA TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS

Artículo 35. Ficha del trámite para la expedición de documento migratorio en la modalidad, reposición de documento migratorio:

Caso en que se presenta	Aplicable a la persona extranjera en caso de robo, extravío, deterioro parcial o destrucción total de su tarjeta de residente, de visitante o de su FMM.
Fundamento jurídico:	Artículos 3, fracciones VI, XI, XXVIII, XXIX y XXX; 16, fracciones I y II; 43, 58, 64, 77, 78, 79, 126, 128, 130 y 131 de la Ley; artículos 1, 152, 156, 157 y 162 del Reglamento
Forma de presentación:	Formato para solicitar trámite migratorio de estancia.
Lugar donde se presenta:	Oficinas de atención a trámites del Instituto.
Monto de los derechos:	Los previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos
Plazo máximo de resolución:	15 días hábiles
Vigencia de la autorización:	La que corresponda al documento migratorio que se está reponiendo.
Excepciones al artículo 15-A de la LFPA:	Se requiere original de los documentos señalados en los requisitos 2, 3, 5 y 6.
Requisitos: 1. Copia del pasaporte, documento de identidad y viaje o documento oficial que haya exhibido para obtener la condición de estancia de la que es titular. Cuando la persona extranjera se encuentre documentada con FMM deberá exhibir original. 2. Comprobante del pago de derechos que corresponda, de conformidad con la Ley Federal de Derechos. 3. En caso de reposición de tarjeta de visitante o de residente, deberá presentar formato básico debidamente llenado y tres fotografías tipo infantil	

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

<p>(tamaño 2.5x3 cm.), dos de frente y una del perfil derecho de la cara, fondo blanco, con la frente y las orejas descubiertas, sin aretes y sin anteojos. No se aceptan fotografías instantáneas.</p> <p>4. En caso de que la reposición tenga lugar por deterioro parcial o destrucción total, deberá adjuntar la FMM, la tarjeta de visitante, la tarjeta de residente o el documento provisional según sea el caso.</p> <p>5. En caso de robo o extravío del documento migratorio en territorio nacional, la persona extranjera deberá comparecer personalmente ante la autoridad migratoria. La comparecencia deberá asentarse en acta de hechos.</p> <p>6. En caso de robo o extravío en el exterior, la persona extranjera deberá presentar la FMM y la visa para reposición con la que viajó a México.</p>
<p>Criterios de resolución:</p> <p>I. La autoridad migratoria previa verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables y de las listas de control migratorio, emitirá la resolución que corresponda:</p> <p>a) Si la resolución es positiva, la autoridad migratoria expedirá el documento correspondiente en la condición de estancia, y con la misma vigencia que tenía el documento que se repone. Para la reposición de FMM, se imprimirá el sello de la oficina de trámites y se engrapará la resolución a la misma.</p> <p>b) En caso de resolución negativa, deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada, otorgando un plazo entre quince y treinta días naturales para que la persona extranjera abandone el territorio nacional, o solicite la regularización de su estancia.</p> <p>II. En caso de que la autoridad migratoria detecte que la persona extranjera se encuentra en alguna hipótesis de cancelación en términos de la Ley, deberá desahogar como cuestión incidental, la cancelación o no del documento migratorio.</p>
<p>Información importante para el usuario:</p> <p>- La persona extranjera deberá llenar el formato básico que se encuentra disponible en la página electrónica oficial del Instituto, imprimirlo y presentarlo en la oficina de trámites.</p> <p>La impresión de huellas dactilares, el pegado de las fotografías y firma de la persona extranjera, se realizarán ante la autoridad migratoria que expedirá la tarjeta correspondiente.</p> <p>- La autoridad migratoria podrá cancelar el documento migratorio, por las causas señaladas en el artículo 64 de la Ley</p>

CAPITULO V

TRAMITE PARA QUE LOS RESIDENTES NOTIFIQUEN CAMBIOS

Artículo 55. La persona extranjera titular de la condición de estancia de residente temporal, residente temporal estudiante y residente permanente, se encuentran obligadas a notificar los cambios de estado civil, nombre o nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo.

Artículo 56. Ficha del trámite para que los residentes notifiquen cambios.

Caso en el que se presenta:	Aplicable a la persona extranjera titular de la
-----------------------------	---

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

	condición de estancia de residente temporal, de residente temporal estudiante o de residente permanente que cambie de estado civil, nombre o nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo
Fundamento jurídico:	Artículos 3, fracciones VI, XI, XXVIII y XXIX, 16, fracción III, 43, 52, fracciones VII, VIII y IX, 54, 58, 63, 77, 79, 126, 128, 130 y 131 de la Ley; 1, 164, 165, 167 y 168 del Reglamento.
Forma de presentación:	Formato para solicitar trámite migratorio de estancia.
Lugar donde se presenta:	Oficinas de atención a trámites del Instituto
Monto de los derechos:	No aplica
Plazo máximo de resolución:	5 días hábiles
Vigencia de la autorización:	No aplica.
Excepciones al artículo 15-A de la LFPA:	Se requiere original de los documentos señalados en los siguientes requisitos.
Requisitos: <ol style="list-style-type: none">1. Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de decir verdad manifieste el cambio de estado civil, nombre, nacionalidad, nuevo domicilio o lugar de trabajo, señalando expresamente el anterior y el nuevo estado o dato que corresponda. En caso de doble nacionalidad deberá indicarlo y la que deberá considerarse para su registro y estancia en territorio nacional;2. Original y copia de la tarjeta de residente;3. En el caso de cambio de estado civil deberá presentar acta de matrimonio, sentencia de divorcio con fecha en que causó ejecutoria o acta de defunción del cónyuge;4. En el caso de cambio de nacionalidad deberá presentar pasaporte de la nueva nacionalidad, certificado de nacionalidad o carta de naturalización, y5. En el caso de cambio de nombre deberá presentar pasaporte o documento de identidad y viaje con el nuevo nombre y, en su caso, documento emitido por la autoridad competente de su país en el que conste el cambio de nombre.	
Criterios de resolución: <p>I. En caso de que la persona extranjera cambie de nombre la autoridad migratoria podrá expedir documento migratorio con el nuevo nombre, siempre y cuando la persona extranjera promueva reposición del mismo. En todo caso, los datos de la persona extranjera se integrarán a su historial y expediente migratorio.</p>	
Información importante para el usuario: <p>- La persona extranjera deberá notificar al Instituto dentro de los siguientes noventa días naturales a que ocurran los cambios de estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo. En caso de no cumplir con dicha obligación se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 158 de la Ley.</p>	

65. El contenido de los preceptos transcritos permiten observar lo siguiente. Mientras que las normas del Capítulo IX de la Ley de Migración establecen un marco procedimental general, las normas específicamente aplicadas en

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

el oficio –y las relacionadas en el sistema normativo y conforme a la jerarquía de normas– revelan con mayor claridad cómo se materializa la exclusión de las identidades de género diversas en el sistema migratorio mexicano. Son estas normas señaladas, y no las meramente procedimentales del Capítulo IX, las que contienen los elementos sustantivos que permiten analizar la discriminación alegada por la quejosa.

66. En consecuencia, esta Primera Sala, en ejercicio de su facultad de precisión del acto reclamado y en aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente por tratarse de una persona migrante⁴², ha identificado las normas que fueron efectivamente aplicadas mediante el oficio impugnado. Estas disposiciones incluyen, como se dijo ya, los artículos 63 de la Ley de Migración, 167 del Reglamento, y los artículos 35, 55 y 56 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios.
67. Estos preceptos no constituyen disposiciones aisladas, sino que forman parte de un sistema normativo integral que regula la situación jurídica de las personas extranjeras en territorio nacional. Este sistema comprende desde las disposiciones generales sobre trámites migratorios –que, según el artículo 3 fracción XXXV incluye “cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter migratorio a fin de que se emita una resolución (...)”–, hasta las normas específicas que regulan la actualización de datos personales, cambios de identidad y reposición de documentos (es decir, la materialización de los trámites específicos).
68. Además, su punto de unión refiere, como ya dijimos, al artículo 126 de la Ley de Migración, norma que efectivamente fue impugnada y que nos permite observar que la Ley, el Reglamento y otras disposiciones

⁴² Tesis 1ª./J. 114/2023 (11ª.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo II, página 1611, registro digital: 2027214. De rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ES APLICABLE EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR PERSONAS MIGRANTES.”

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

administrativas de carácter general son las que prevén justamente los datos y requisitos y los supuestos de diversos trámites migratorios, entre ellos, la modificación de los datos de las tarjetas de residencia.

69. Ambos conjuntos normativos operan de manera complementaria e interdependiente, configurando un sistema que no puede entenderse de manera fragmentada sin comprometer la efectividad de la protección judicial. Esta interpretación es consistente con la jurisprudencia de la Segunda Sala 2a./J. 91/2018 (10a.)⁴³ –compartida por esta Primera Sala–, que establece que la persona juzgadora federal está facultada para introducir en su análisis normas que no formaron parte de la litis, siempre y cuando estén estrechamente relacionadas con la materia de la impugnación por constituir un sistema normativo.
70. Además, la inclusión de las normas aplicadas responde fielmente a la pretensión fundamental de la parte quejosa, obtener protección constitucional frente a las disposiciones migratorias que obstaculizan el reconocimiento de su identidad de género en el cambio de su tarjeta de residencia. Esta pretensión trasciende la impugnación formal de artículos específicos y se dirige a cuestionar la constitucionalidad del sistema normativo que, en su conjunto, regula los procedimientos para el cambio de marcadores de identidad y actualización de documentos de identidad de las personas extranjeras.
71. Finalmente, el análisis integral de los informes justificados revela que las propias autoridades responsables han reconocido y defendido la existencia del sistema normativo integral en materia migratoria, por lo que no existe vulneración alguna al principio de contradicción procesal. Las autoridades

⁴³ Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 938, Registro digital: 2017869 de rubro: “de rubro AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO”

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

responsables, particularmente el Poder Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Migración, no sólo reconocieron la existencia del sistema normativo que vincula las disposiciones inicialmente impugnadas con las normas aplicadas mediante el oficio, sino que basaron su defensa precisamente en la interpretación sistemática de estas disposiciones⁴⁴, ejerciendo efectivamente la defensa del sistema normativo completo.

72. En consecuencia, y como conclusión del estudio de los agravios en el recurso de revisión, se precisa como la materia de litis en el presente amparo: (i) la constitucionalidad de los artículos 35⁴⁵, 55 y 56⁴⁶ de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, así como los requisitos previstos en el artículo 63, segundo párrafo, de la Ley de Migración⁴⁷ y el artículo 167 de su Reglamento⁴⁸ y (ii) el oficio ***** que representa el acto de aplicación. De ahí que no fuera necesario acudir a la calidad autoaplicativa de ciertas normas.

⁴⁴ El Ejecutivo Federal afirmó expresamente que “el Capítulo IX de la Ley de Migración no debe interpretarse de manera aislada, sino en conjunto con el resto de las disposiciones contenidas en la propia Ley, su reglamento y los lineamientos aplicables”. Esta declaración constituye un reconocimiento explícito de que las normas impugnadas forman parte de un sistema normativo integral que incluye necesariamente las disposiciones sobre cambio de nombre y actualización de documentos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración fue aún más específico al identificar las normas aplicables al caso concreto, señalando que “el trámite correspondiente es la solicitud de notificación de cambio de nombre y reposición de documento, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, así como los requisitos previstos en el artículo 63, segundo párrafo, de la Ley de Migración; el artículo 167 de su Reglamento; y el artículo 56 de los propios Lineamientos.”

⁴⁵ **Artículo 35.** Ficha del trámite para la expedición de documento migratorio en la modalidad, reposición de documento migratorio: (...)

⁴⁶ **Artículo 56.** Ficha del trámite para que los residentes notifiquen cambios.

⁴⁷ **Artículo 63.** El Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información relativa a todos aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de residente temporal o de residente permanente.

Los extranjeros tendrán la obligación de comunicar al Instituto de cualquier cambio de estado civil, cambio de nacionalidad por una diversa a la cual ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro de los noventa días posteriores a que ocurra dicho cambio.

⁴⁸ **Artículo 167.** Las personas extranjeras residentes temporales y permanentes deberán notificar al Instituto, dentro de los siguientes noventa días naturales a que ocurran, los cambios de estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo. Para ello, deberán presentar solicitud de trámite y los siguientes documentos:

I. Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste, según sea el caso, su nuevo domicilio o lugar de trabajo;
II. En el caso de cambio de estado civil, deberá presentar acta de matrimonio, sentencia de divorcio con fecha en que causó ejecutoria o acta de defunción del cónyuge, y
III. En el caso de cambio de nacionalidad, deberá presentar pasaporte de la nueva nacionalidad, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

V. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

73. Una vez que se precisó la materia de la litis de amparo, esta Primera Sala observa que en el juicio de amparo las autoridades responsables señalaron diversas causales de improcedencia que se consideraban actualizadas. Por lo tanto, éstas serán analizadas a continuación a efecto de estar en condiciones para estudiar lo argumentado en la demanda de amparo.

A. Falta de conceptos de violación (Art. 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII de la Ley de Amparo)

74. El Poder Ejecutivo Federal invocó en su informe justificado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII de la Ley de Amparo. Al respecto argumentó que la quejosa no había manifestado verdaderos conceptos de violación. Desde su perspectiva, la demanda contenía únicamente “afirmaciones generales e imprecisas que no constituyen la expresión de conceptos de violación concisos que permitan el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas”. El Poder Ejecutivo consideró que la demanda no contenía manifestaciones dirigidas a combatir la constitucionalidad del Capítulo IX de la Ley de Migración, sino que hacía depender su constitucionalidad del actuar del INM y la COMAR, es decir, únicamente del acto de aplicación.
75. Sin embargo, esta causal resulta **infundada**. Más allá de la precisión de los actos reclamados que se realizó en el apartado anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa planteó conceptos de violación suficientemente articulados y encaminados a demostrar la inconstitucionalidad tanto del sistema normativo impugnado como del acto de aplicación.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

76. La quejosa señaló claramente que la normativa migratoria excluye a las personas trans al no contemplar específicamente el cambio de género en los documentos migratorios, que esta omisión vulnera sus derechos a la identidad, libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y seguridad jurídica, y que la exclusión constituye una medida discriminatoria que afecta a la comunidad trans migrante en relación con la comunidad trans mexicana.
77. Estos argumentos constituyen conceptos de violación claros que permiten el análisis constitucional pretendido. Además, esta Primera Sala ha establecido que en casos de personas migrantes que promueven una demanda de amparo, debe aplicarse la suplencia de la queja⁴⁹, lo que refuerza lo infundado de esta causal.

B. Falta de interés (Art. 61, fracción XII de la Ley de Amparo)

78. El Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional de Migración, en sus informes justificados, invocaron la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, es decir, la falta de interés jurídico o legítimo de la quejosa.
79. Por una parte, el Poder Ejecutivo argumentó que los actos reclamados no generan un agravio irreparable en la esfera jurídica de la quejosa y que por lo tanto ésta carece de interés para acudir al juicio de amparo. Su argumento se estructuró en tres pilares: primero, que la regulación sobre trámites migratorios está dirigido a todas las personas extranjeras sin excluir o hacer distinción alguna por su situación particular; segundo, que en el oficio impugnado no se aplica el capítulo de la Ley de Migración que reclama –lo cual, como se especificó en el apartado anterior y la fijación de los actos reclamados derivó de un sistema normativo efectivamente

⁴⁹ Tesis 1ª./J. 114/2023 (11ª.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo II, página 1611, registro digital: 2027214. De rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ES APLICABLE EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR PERSONAS MIGRANTES."

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

aplicado y anclado en el artículo 126 de la Ley de Migración que sí fue impugnado—; y tercero, que a la quejosa no le niegan su solicitud de cambio de datos de identificación conforme a su identidad, sino que únicamente le informan los procedimientos que debe realizar para dicho cambio.

80. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración argumentó que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa porque “el derecho de petición fue atendido”. Según el INM, el oficio impugnado formaba parte del seguimiento dado al trámite con el que se informó a la quejosa que, para proceder con la modificación de su tarjeta de residencia, previamente debía solicitar la modificación de la constancia de reconocimiento de la condición de refugiada ante la COMAR. En pocas palabras, se argumenta que sin negativa explícita, no hay afectación.
81. El estudio de esta causal está en el corazón de esta litis de amparo y trae al frente uno de los principales problemas jurídicos en materia procesal de amparo que se deben resolver. Esta Primera Sala reconoce la razonabilidad aparente del planteamiento de las autoridades responsables. Efectivamente, del oficio impugnado no se desprende de manera explícita que las autoridades mexicanas hayan negado categóricamente a la quejosa la adecuación de sus documentos migratorios —específicamente, su tarjeta de residente permanente— para que ésta refleje su identidad de género en el demarcador de género/sexo y nombre.
82. Al contrario, una lectura del oficio reclamado podría sugerir elementos aparentemente favorables: el INM no niega la posibilidad de modificar la tarjeta de residente permanente para reflejar la identidad de género de la quejosa; el oficio señala que existen vías administrativas para realizar los cambios solicitados (notificación de cambio de nombre y reposición de documento migratorio); entre los requisitos, el oficio menciona explícitamente una “carta firmada por la persona extranjera en la que bajo

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

protesta de decir verdad manifieste el cambio de nombre y género” y un “documento emitido por la COMAR en la que conste el otorgamiento de la condición de refugiado a nombre de *****” –con lo que se fija un requisito previo a la atención por el Instituto–; y finalmente, el oficio informa sobre las comunicaciones previas entre el INM y la COMAR para atender el caso, mostrando un esfuerzo de coordinación entre autoridades.

83. Es cierto, en el **amparo en revisión 245/2022**⁵⁰ sostuvimos que el segundo párrafo del artículo 8º constitucional mandata a las autoridades a dar respuesta a cualquier petición que las y los ciudadanos formulen, sin que esto signifique resolver, en todo momento, de forma favorable la petición. Además sostuvimos que es válido si esta respuesta implica la simple orientación a la persona con respecto a la petición formulada o incluso la canalización de ésta a la autoridad competente. Sin embargo, también sostuvimos que el acto por el que se le dé respuesta a la persona peticionaria “podría no estar necesariamente fundado y motivado (...) lo que, en su caso, conforme a la doctrina de este Alto Tribunal, podría involucrar un vicio de diversa índole, cuestionable a partir de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna”⁵¹. Éste es precisamente el tipo de afectación del que, en un primer momento, se duele la quejosa. Nos explicamos.

84. La garantía de legalidad, prevista en el artículo 16 constitucional, constituye uno de los pilares fundamentales del régimen jurídico en un Estado de Derecho. Este principio exige que todo acto de autoridad dirigido a las personas esté debidamente fundado y motivado, lo cual implica que sea expresión del derecho positivo y haya sido emitido por una autoridad competente dentro del ámbito de sus atribuciones legales. Su razón de ser radica en evitar actos arbitrarios o discrecionales por parte de

⁵⁰Resuelto por esta Primera Sala en sesión 1 de febrero de 2023 por unanimidad de cinco votos de la Señora Ministra y de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente).

⁵¹ Tesis 1a./J. 14/2024 (11a.). Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Enero de 2024, Tomo II, página 1789, Registro digital: 2028070, de rubro: “EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD ACEPTA QUE HA RECIBIDO UNA PETICIÓN, QUEDA OBLIGADA A DICTAR ACUERDO SOBRE ÉSTA”

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

las autoridades, y en asegurar que las personas destinatarias de dichos actos puedan ejercer un control o defensa adecuada frente a ellos, al menos en la medida en que les sea comprensible su contenido y justificación.

85. Fundar y motivar un acto de autoridad implica, como mínimo: (a) la expresión clara y precisa de los preceptos legales aplicables al caso concreto (fundamentación); (b) la exposición detallada de las razones fácticas y jurídicas que llevaron a la emisión del acto (motivación); y (c) la existencia de una relación lógica entre la norma invocada y las circunstancias particulares del caso, de modo que exista congruencia entre los motivos expresados y el marco normativo aplicable. Esta exigencia no sólo se vincula con el principio de legalidad, sino también con el de seguridad jurídica, en tanto que garantiza a las personas la posibilidad de conocer con certeza las consecuencias jurídicas a las que se sujetan, así como el contenido, alcance y límites del actuar de la autoridad.
86. En ese sentido, cuando una autoridad emite un acto que carece de una debida fundamentación o motivación, o bien cuando actúa fuera del marco de sus atribuciones legales, se genera una violación directa al principio de legalidad y se coloca a la persona destinataria del acto en una situación de incertidumbre e indefensión. Tal omisión no solo impide ejercer adecuadamente los mecanismos de defensa legal disponibles, sino que además compromete la confianza legítima en las instituciones y en el orden jurídico, debilitando el Estado de Derecho.
87. De los conceptos de violación de la quejosa se desprenden al menos tres formas específicas en las que –señala– el oficio⁵² le afecta de manera directa en su esfera de derechos:

⁵² Y en consecuencia las normas reclamadas, las cuales se hicieron depender, en gran medida del acto de aplicación y la defensa frente a éste.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

- a) La quejosa sostiene que el INM condiciona el ejercicio de su derecho a la identidad a un trámite que no está reflejado en el fundamento otorgado ni se desprende claramente de los 'pasos' que le fueron comunicados (por ejemplo, que el trámite se pueda gestionar, en parte, desde el micrositio indicado). Esta situación genera incertidumbre sobre el procedimiento efectivo para ejercer su derecho fundamental o sobre la permanencia de la interpretación proporcionada en el oficio;
- b) La quejosa argumenta que el INM evade su responsabilidad al no ejercer sus propias facultades legales generales para modificar los datos de los documentos migratorios, trasladando la carga a una autoridad distinta (la COMAR), sin sustento normativo. Esto implica una actuación fuera del marco legal, contraria al principio de legalidad e indica la falta de un procedimiento adecuado para su petición.
- c) Por último, señala que el oficio condiciona la modificación de su tarjeta de residencia a un trámite ante la COMAR, pese a que no existe un procedimiento legalmente establecido para modificar la constancia de refugiada por razones de identidad de género. Esto genera incertidumbre jurídica y deja a la quejosa en un estado de indefensión, ya que no cuenta con una vía efectiva ni clara para ejercer su derecho a la identidad.

88. Éstas son razones suficientes –sobre todo cuando se habla de procedencia– para dar lugar a su estudio. Aunque el oficio ofrece una interpretación favorable de las normas a su alcance, la petición se sostiene en que, básicamente, estas normas no establecen lo que la autoridad pretende que establezcan y que, con su resolución, el INM fragmenta el procedimiento entre distintas instancias, complicando injustificadamente el ejercicio del derecho de forma no adecuada a sus necesidades.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

89. Dicho en otras palabras, para la quejosa, la solución presentada por el INM resulta precaria en términos de seguridad jurídica, no está formalizada en disposiciones normativas claras, está sujeta a un procedimiento complejo y poco accesible que involucra a múltiples instituciones, y es insuficiente para garantizar efectivamente el derecho a la identidad de género. La falta de formalización normativa genera un estado de vulnerabilidad jurídica que constituye, para ella, una afectación continua y actual.
90. Lo anterior no sólo es razonable, sino que se inserta en la causa de pedir de la quejosa. En esencia, ella señala que la normativa migratoria excluye implícitamente a las personas trans de un supuesto que les permita adecuar sus documentos a su identidad de género de manera integral. Por lo mismo, denuncia que existe un sistema normativo que no contempla adecuadamente sus derechos fundamentales, creando un estado de incertidumbre jurídica permanente.
91. Como se observó anteriormente en esta ejecutoria, las disposiciones aplicadas establecen la posibilidad de que las personas migrantes realicen cambios que se verán reflejados en sus tarjetas de residencia, así como los requisitos para realizar dichos cambios. De la totalidad de las normas, así como de la página oficial del Instituto Nacional de Migración que le fue referida a la quejosa en el oficio reclamado ([Micrositio Tramites Migratorios](#)), se advierte que únicamente existe la posibilidad para realizar notificación de cambio en los siguientes supuestos: (1) cambio de domicilio; (2) cambio de lugar de trabajo; (3) cambio de estado civil; (4) cambio de nombre; y (5) cambio de nacionalidad. Significativamente, no se contempla el cambio de identidad de género como categoría específica.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023



92. Para la quejosa, ello implícitamente excluye a la comunidad trans de un procedimiento adecuado para realizar los cambios necesarios para que sus documentos migratorios coincidan con su identidad de género.
93. Además, aunque los artículos 55 y 56 de los Lineamientos –que le fueron citados a la quejosa como fundamento– establecen un trámite para cambio de nombre, no hay referencia explícita al cambio de género ni a la modificación del marcador de sexo/género en los documentos migratorios. Lo anterior también se ve reflejado en el micrositio de trámites migratorios al que la quejosa tiene acceso. En este trámite –tal y como fue constatado por esta Primera Sala– se solicita la inclusión del sexo de la persona extranjera conforme al documento de identidad y únicamente se permite modificar el nombre o el apellido.
94. En este sentido, la quejosa señala que un documento que contiene el nombre que corresponde con el género con el que se identifica, pero que contiene el género que le fue asignado al nacer, desconoce su identidad de género como mujer trans.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Datos del extranjero (conforme a pasaporte o documento de identidad)

☐ Conozco mi NUE

Clave Única de Registro de Población (CURP):

Nombre(s)*:

Apellido(s)*:

Sexo*:

Selecciona

Fecha de nacimiento*:

dd/mm/aaaa o ddmmaa

Nacionalidad actual*:

Selecciona

Estado civil actual:

Selecciona

Nuevos datos del extranjero

Nombre(s) nuevo*:

Apellido(s) nuevo*:

95. De ahí que, aunque el oficio sea aparentemente favorable, es enteramente razonable considerar que la persona trans extranjera se enfrenta con éste a una situación de una incertidumbre sobre cuál es el procedimiento específico y legalmente establecido para obtener el reconocimiento pleno de su identidad de género en documentos migratorios, incertidumbre que – considera– la fundamentación y motivación del oficio reclamado no subsana.
96. Tanto es así que la situación actual permite que distintas oficinas migratorias o funcionarios adopten interpretaciones divergentes sobre el procedimiento adecuado. Esta situación da lugar a lo que podría denominarse una forma de “lotería burocrática”, en la que el reconocimiento de derechos depende del criterio aleatorio de quien atiende

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

el trámite, lo que atenta contra los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad.

97. Esta Primera Sala reconoce que la incertidumbre jurídica constituye, en sí misma, una afectación a derechos fundamentales susceptible de control constitucional. En este caso, esta incertidumbre no es hipotética⁵³ sino actual y continua, pues afecta cotidianamente la relación de la persona con su estatus migratorio, su documentación oficial, y su capacidad de ejercer plenamente sus derechos en la sociedad mexicana.
98. Esta problemática se relaciona con lo que en la literatura especializada se ha denominado la actuación de la “burocracia a pie de calle”⁵⁴, es decir, las personas servidoras públicas que, en su contacto directo con la ciudadanía, toman decisiones cotidianas que determinan cómo se implementan, en la práctica, las políticas públicas y normas jurídicas. En este nivel operativo, la falta de lineamientos claros o procedimientos uniformes puede dar lugar a arbitrariedades o tratos desiguales, lo cual debilita gravemente la efectividad del principio de legalidad y compromete la protección sustantiva de los derechos humanos.

⁵³ Puede decirse, desde una primera mirada, que la afectación generada por las normas impugnadas parecería ser meramente hipotética o eventual, en tanto que la quejosa aún no ha realizado el trámite ante la COMAR o no ha obtenido un nuevo documento fuente que refleje su identidad de género. Sin embargo, esta objeción no resulta válida desde la perspectiva constitucional, por dos razones fundamentales.

Primero, la incertidumbre jurídica generada por la omisión normativa no es meramente teórica. La quejosa ya se encuentra en una situación de precariedad jurídica porque, aunque está obligada a mantener actualizada su documentación migratoria, no cuenta con la certeza de que podrá hacerlo una vez que logre actualizar su identidad de género ante las autoridades competentes. La inexistencia de una vía normativa clara para modificar el género en su tarjeta de residencia genera un vacío que coloca a la quejosa en una situación de vulnerabilidad e inseguridad jurídica, lo cual es en sí mismo una afectación actual a su esfera jurídica.

Segundo, debe tenerse en cuenta que el deber de las autoridades de respetar y garantizar derechos –entre ellos, legalidad– no se activa únicamente ante la consumación de un daño, sino también frente a condiciones normativas que razonablemente colocan a las personas en riesgo de afectación. En este caso, la incertidumbre normativa es tal que la quejosa no puede prever de manera razonable si, una vez cuente con un documento fuente actualizado, el Instituto Nacional de Migración estará jurídicamente en posibilidad de modificar el dato en cuestión. Esta ambigüedad normativa no solo desincentiva el ejercicio de sus derechos, sino que además la obliga a sostener una identidad documental incongruente con su identidad real, lo que constituye una afectación jurídica, psicológica y social.

⁵⁴ Lipsky, Michael. “Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy”, Institute for Research on Poverty Discussion Papers, 1969, pp. 48-69.

Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service*, Russell Sage Foundation, Nueva York, 2010.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

99. Conscientes de estos riesgos, han existido esfuerzos normativos orientados a reducir la discrecionalidad administrativa. Un ejemplo significativo fue la emisión, en 2012⁵⁵, de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, cuyo objetivo declarado fue “reducir la discrecionalidad de las autoridades administrativas dando a conocer los criterios básicos bajo los cuales se aplicarán las normas e impulsar reformas al marco jurídico vigente para dar certeza, claridad y agilidad a los procedimientos que los particulares tramitan ante las instancias de la Administración Pública Federal”. Bajo este espíritu, un control judicial de estas normas puede precisamente contribuir a la promoción de un Estado de Derecho.
100. Por lo tanto, para efectos de procedencia, se concluye que existe una afectación real y actual a la esfera jurídica de la quejosa. Esta deriva, por un lado, de una imposibilidad normativa estructural que le impide modificar su tarjeta de residencia para que refleje su identidad de género de forma clara, directa y con seguridad jurídica. Por otro lado, dicha afectación también emana de la incertidumbre jurídica generada por el acto reclamado, cuya fundamentación y motivación –según lo expuesto por la quejosa en su causa de pedir– resultan inadecuadas. En particular, la autoridad migratoria invoca disposiciones normativas que no contienen el supuesto específico en el que se encuentra la quejosa ni observa un fundamento que permita sustentar el procedimiento señalado, lo que coloca a la quejosa en una situación de inestabilidad jurídica. Esta situación es plenamente susceptible de ser analizada en el fondo del juicio de amparo, a la luz del parámetro de regularidad constitucional.
101. Adicionalmente, como fue señalado por esta Suprema Corte en el **amparo en revisión 1317/2017**⁵⁶, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

⁵⁵ Véase publicación de estos lineamientos en el Diario oficial de la Federación de fecha 8 de noviembre de 2012 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276967&fecha=08/11/2012#gsc.tab=0

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

ha sostenido⁵⁷ que el cambio de nombre y, en general, la adecuación de los registros públicos y documentos de identidad para que reflejen la identidad de género de las personas, constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de esta interpretación, los Estados están no solo autorizados, sino obligados a reconocer legalmente la identidad de género de las personas y a establecer procedimientos accesibles, expeditos y adecuados para permitir la modificación de documentos oficiales, sin imponer cargas irrazonables o desproporcionadas que obstaculicen el ejercicio de ese derecho.

102. Esta obligación arroja luz a una de las posibles afectaciones reclamadas por la quejosa: la ausencia de un procedimiento claro, o la existencia de obstáculos administrativos excesivos, configura por sí misma una afectación actual y concreta. En ese sentido, la dificultad que enfrenta la quejosa para ver adecuadamente reconocida su identidad de género en su tarjeta de residencia –aún habiendo hecho gestiones ante la COMAR– actualiza el interés jurídico requerido para la procedencia del juicio de amparo y revela una situación estructural del Estado que debe ser objeto de un análisis de fondo por parte del Poder Judicial.

103. En efecto, del contenido del informe justificado rendido por el INM se desprende que, si bien la quejosa acudió ante la COMAR para solicitar el cambio en la constancia de reconocimiento de la condición de refugiada, dicha autoridad remitió la solicitud a la Dirección General del Registro Civil, requiriendo su cooperación para determinar cuál sería el procedimiento aplicable. Esta cadena de remisiones sucesivas entre autoridades evidencia la falta de un marco normativo claro y coordinado para garantizar el derecho a la identidad de las personas extranjeras refugiadas trans, lo

⁵⁶ Resuelto por la Primera Sala en sesión de 17 de octubre de 2018 por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (Ponente) en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserva el derecho para formular voto particular. Véanse páginas 26 y 27 de la ejecutoria.

⁵⁷ Opinión consultiva OC-24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

cual, lejos de resolver el problema planteado, lo agrava. Este tipo de indeterminación administrativa debe analizarse conforme a los estándares interamericanos ya citados, lo que refuerza el argumento de incertidumbre jurídica y exclusión institucional que enfrenta la quejosa –tanto respecto a las normas como al oficio–, elementos que ameritan un examen constitucional a profundidad.

104. Finalmente, el argumento del INM en el sentido de que no existe afectación alguna porque la normativa se aplica de forma general a todas las personas extranjeras, desconoce el núcleo mismo del reclamo de la quejosa: el no considerar las necesidades específicas de ciertos grupos vulnerables en los beneficios que otorgan las normas –ver reflejado cambios en los documentos de identidad–. En este sentido, hemos reconocido que la exclusión normativa puede constituir una forma de discriminación cuando impide el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, por lo tanto, esta cuestión también deberá ser estudiada.

105. En conclusión, esta causal resulta **infundada**. Se advierten diversas afectaciones alegadas susceptibles de control constitucional: la incertidumbre jurídica frente a la posible vulneración del principio de legalidad, la adecuación del procedimiento indicado –incluyendo la remisión a la COMAR para la modificación de un documento previo al cambio de la tarjeta de residencia permanente– la falta de ejercicio directo de una competencia que, según la quejosa, le corresponde al INM. No se requiere una negativa explícita, entonces, para que exista afectación.

C. Principio de relatividad y efectos generales (Art. 61, fracción XXIII en relación con los Arts. 73 y 77 de la Ley de Amparo)

106. Por último, el Poder Ejecutivo sostuvo que el juicio de amparo es improcedente porque, aun obteniendo una sentencia favorable, sus efectos protectores no podrían concretarse al reclamarse “la inconstitucionalidad

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

de una omisión legislativa”. Su argumento se construyó sobre la premisa de que el principio de relatividad del amparo impide que la sentencia obligue a las autoridades legislativas a subsanar dicha omisión, pues ello implicaría dotar a la resolución de efectos generales, contrario a la naturaleza del juicio de amparo.

107. Sin embargo, esta causal es **inoperante**. Primero, como se fijó en la sección anterior, en el caso se tiene por reclamada no una omisión legislativa absoluta, sino la constitucionalidad específica de diversos preceptos de la normativa migratoria que operan de manera sistemática para excluir a las personas trans del reconocimiento pleno de su identidad de género. Los efectos de una eventual sentencia favorable no vulnerarían el principio de relatividad, pues se centrarían, en todo caso, en restaurar los derechos de la quejosa.
108. Más aún, incluso de encontrarse una omisión legislativa absoluta, ello no implicaría, en sí mismo, la improcedencia de amparo por vulneración al principio de relatividad. En la jurisprudencia de esta Suprema Corte se ha reconocido, primero, la justiciabilidad de este tipo de actos reclamados⁵⁸ bajo una serie de características específicas (sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente).
109. De ahí que la necesidad de una medida legislativa restitutoria de derechos como posible consecuencia de la inconstitucionalidad de la omisión reclamada que dependa de la real concurrencia de un deber de legislar a cargo del Poder Legislativo, del incumplimiento de ese deber y de si esa

⁵⁸ Véase, por ejemplo, el amparo en revisión 1359/2015 resuelta por la Primera Sala en sesión de 15 de noviembre de 2017 por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quienes formularon voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular.

Véase también la tesis: 1a. XX/2018 (10a.) Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1100, Registro digital: 2016424, de rubro “OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO”.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

omisión generó o no una afectación a los derechos humanos del quejoso sea consistente con el marco constitucional vigente en materia de amparo. Al respecto, ya hemos sostenido que no existe cabida para una interpretación restrictiva del principio de relatividad de las sentencias que tienda a frustrar el propio objeto del medio de control constitucional: la protección de todos los derechos humanos de las personas que acuden con interés jurídico o legítimo a un juicio de amparo⁵⁹. De ahí que se concluya la ineficacia de esta causal de improcedencia.

110. Por lo tanto, al no advertir que se actualice alguna otra causal de improcedencia –según la manifestación de las partes o su análisis de oficio– se tienen como normas impugnadas los artículos 63 de la Ley de Migración, los diversos 167 del Reglamento de la Ley de Migración y 35, 55 y 56 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. Asimismo, se tiene como acto reclamado el oficio *****. Todos serán motivo de estudio en el apartado siguiente.

VI. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

111. El presente asunto tiene como origen una situación fáctica con alcances normativos: la quejosa, una mujer trans reconocida como refugiada en México –debido a la persecución por motivos de género que sufrió en su país de origen–, posee como documento de identidad una tarjeta de residencia permanente que no refleja su identidad de género ni su nombre actual, sino que consigna aquéllos que le fueron asignados al nacer.
112. Al buscar modificar estos elementos, la quejosa se encontró con normas que no prevén de forma específica este supuesto. De hecho, las leyes que

⁵⁹ Véase por analogía la tesis Tesis: P./J. 2/2022 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, página 9, Registro digital: 2024503 de rubro: “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA EN SENTIDO ESTRICTO DEL PODER LEGISLATIVO, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS.”

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

permiten modificar los datos de la tarjeta de residencia –conforme a lo que se narró en los apartados anteriores– no contemplan de forma clara y específica la posibilidad de rectificar el dato referente al sexo/género de la persona extranjera conforme a su identidad. La autoridad migratoria –el Instituto Nacional de Migración (INM)– después de solicitar la colaboración de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), le dio respuesta a la quejosa trazando un procedimiento para atender su situación.

113. El procedimiento era el siguiente. Primero, la quejosa debía acudir a la COMAR, pues conforme a los artículos 15, fracción X⁶⁰, 32 y 33⁶¹ del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, dicha autoridad tiene la facultad de reconocer y, en su caso, modificar los datos personales –incluidos el nombre y el género– de las personas refugiadas en su constancia de reconocimiento. Asimismo, con base en el artículo 85, segundo párrafo⁶², del mismo reglamento, la COMAR debía

⁶⁰ **Artículo 15.-** Serán atribuciones de la Coordinación las siguientes:

X. Llevar un registro actualizado de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria;

⁶¹ **Artículo 32.-** Durante la entrevista, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones:

I. Proporcionar información sobre sus antecedentes personales, los cuales podrán ser verificados con las autoridades competentes;

II. Aportar con veracidad información sobre los motivos por los que salió de su país de origen o de residencia habitual y si, en su caso, proviene de un tercer país;

III. Aportar pruebas o, en su caso, explicar de manera satisfactoria la falta de las mismas;

IV. Relatar las circunstancias de las razones invocadas en apoyo de su solicitud, y

V. Proporcionar cualquier otra información que el entrevistador estime necesaria para esclarecer la existencia de fundados temores o amenazas en su contra.

Artículo 33.- La información sobre los antecedentes personales del solicitante a que se refiere la fracción I del artículo anterior, incluirá sus datos de identidad personal, tales como:

I. Nombre completo, alias o pseudónimos;

II. Fecha y lugar de nacimiento;

III. Nacionalidad o país de residencia habitual;

IV. Grupo étnico;

V. Sexo;

VI. Estado civil;

VII. Religión;

VIII. Ocupación;

IX. Grado máximo de estudios, e

X. Idioma o lengua que habla el solicitante.

Para efectos de evaluar las declaraciones con el objetivo de determinar los elementos objetivos y subjetivos del caso, el solicitante deberá aportar información sobre los familiares que lo acompañan y los que residan en cualquier otro país, así como la información que indique la intención del solicitante en permanecer en el país.

⁶² **Artículo 85.-** Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, el refugiado requiera de los servicios consulares de su país de origen para la obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos y demás actos administrativos, de conformidad con el

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

proporcionarle la asistencia institucional necesaria para que su constancia de reconocimiento como refugiada reflejara adecuadamente su identidad de género. Sólo una vez obtenida dicha constancia modificada, la quejosa podría continuar con los trámites migratorios ante el INM.

114. En una segunda etapa, ya con la constancia actualizada, la quejosa debía presentarse ante el INM para realizar los trámites correspondientes a la actualización de su tarjeta de residencia permanente. En concreto, tendría que iniciar el procedimiento previsto en los artículos 55 y 56 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, relativo al cambio de nombre, y tramitar la reposición del documento conforme al artículo 35 de los mismos Lineamientos.

115. No obstante, desde la perspectiva de la quejosa, este procedimiento presenta múltiples deficiencias. Por un lado, los artículos 55 y 56 de los Lineamientos no contemplan expresamente la posibilidad de modificar el dato relativo al género o sexo, lo que genera una falta de certeza jurídica respecto a la legalidad y estabilidad de la interpretación que, en este caso, realizó la autoridad migratoria con la pretensión loable de reconocer su derecho humano. Por otro lado, aunque la quejosa solicitó formalmente a la COMAR la modificación de los datos de su constancia de refugio, esta autoridad remitió el caso a la Dirección General del Registro Civil, solicitando orientación sobre el procedimiento administrativo aplicable para la adecuación del nombre y la identidad de género. Esta remisión, sin una solución concreta, prolonga la indefinición normativa y la exposición de la quejosa a una cadena de trámites inconclusos.

artículo 57 de la Ley, la Coordinación apoyará al refugiado para ejercer su derecho a no acudir a las autoridades del gobierno de su país, incluyendo la posibilidad de no solicitar la apostilla o legalización de documentos.

Para tal efecto, la Coordinación realizará gestiones ante las dependencias competentes en los trámites y servicios que el refugiado esté solicitando, tales como registro civil, servicios educativos y de seguridad social, así como cualquier otro programa público que busque facilitar su integración al país.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

116. Más aún, el artículo 135 Quater del Código Civil del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)⁶³ –aplicable a la quejosa por ser esta entidad su lugar de residencia– establece como requisitos para la rectificación de identidad de género en actas registrales: ser de nacionalidad mexicana y contar con un acta de nacimiento registrada en dicha entidad. La quejosa no cumple con ninguno de estos requisitos, dado que es una persona extranjera y refugiada sin acta de nacimiento primigenia en el país, por lo que no tiene acceso a los mecanismos ordinarios de reconocimiento de identidad de género previstos para personas nacionales. Además, como extranjera, el registro que le corresponde es el Registro Nacional de Extranjeros, que está a cargo del INM. Esta situación pone en evidencia una forma estructural de discriminación que impide a las personas refugiadas trans ejercer en igualdad de condiciones su derecho a la identidad.
117. Estas circunstancias revelan un entramado de obstáculos normativos y administrativos que no sólo afectan de forma concreta la situación jurídica de la quejosa, sino que también plantean una serie de problemáticas constitucionales ya identificadas en los apartados anteriores y depuradas para su justiciabilidad mediante el amparo.
118. Antes de abordar su análisis de fondo, conviene destacar los principios que orientan el régimen internacional de protección a personas refugiadas, principios que han sido recogidos por el derecho mexicano. Este régimen se articula principalmente a partir de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, complementados en el ámbito regional por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.

⁶³ **Artículo 135 Quater.** Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Ser de nacionalidad mexicana;
- II. Tener al menos 18 años de edad cumplidos.
- III. Desahogar en el Juzgado Central del Registro Civil, la comparecencia que se detalla en el reglamento y manual de Procedimientos del Registro Civil. Así como manifestar lo siguiente:
- IV. El nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia;
- V. El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

119. El derecho de refugiados no es simplemente un sistema diseñado para permitir que las personas escapen del riesgo de daño. El propósito más fundamental de la Convención sobre Refugiados es servir como respaldo a la protección que uno espera del Estado del cual un individuo es nacional⁶⁴. En esencia, su eje central se basa en el reconocimiento de que las personas refugiadas no pueden contar con la protección efectiva de su país de origen para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta imposibilidad –de carácter estructural– impone al Estado receptor el deber de brindar una protección plena, efectiva e integral, que no se limite a evitar la devolución (*non-refoulement*), sino que también garantice el goce pleno de derechos humanos, incluyendo el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica.
120. Este deber de protección implica, entre otras obligaciones, remover activamente las barreras legales, administrativas o prácticas que impidan a las personas refugiadas acceder, en condiciones de igualdad y sin discriminación, a los derechos reconocidos en el marco nacional e internacional. Particularmente, tratándose de personas con identidades de género diversas, este deber cobra una dimensión reforzada, dada su situación de vulnerabilidad estructural e interseccional.
121. En el presente caso la quejosa obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiada por parte del Estado mexicano con base en temores fundados de persecución por motivos de género, en tanto mujer trans. Este reconocimiento supone no solo la constatación de la existencia de una vulneración grave de derechos, sino también la aceptación por parte del Estado de que la protección en sede nacional sustituye –de forma integral– la que no puede brindar el país de origen⁶⁵.

⁶⁴ Hathaway, James y Michelle Foster. The law of refugee status, segunda edición, Cambridge University Press, 2014, pp. 288-289.

⁶⁵ Este principio de sustitución plena de protección también se reconoce en el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado del ACNUR, donde se establece que una vez otorgado el estatuto de refugiado, el Estado debe ofrecer soluciones duraderas que incluyan la integración local y el acceso efectivo a derechos civiles, económicos,

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

122. Al otorgar tal reconocimiento, el Estado mexicano no solo otorga protección formal, sino que también asume la obligación de no reproducir las condiciones que dieron lugar al desplazamiento forzado⁶⁶, lo cual incluye garantizar que el trato administrativo y normativo hacia la persona refugiada no incurra en nuevas formas de exclusión, invisibilización o violencia institucional por razón de su identidad de género. Lo contrario implicaría incurrir en una contradicción estructural: reconocer formalmente la vulnerabilidad, y luego, mediante la práctica administrativa, reproducir el núcleo mismo de esa vulnerabilidad.
123. Aunque la quejosa logró encontrar en México un espacio libre de la persecución directa sufrida en su país de origen, no por ello desaparece su situación de vulnerabilidad, sino que ésta se transforma en una vulnerabilidad interseccional, al conjugarse su identidad de género con su situación de extranjería y su pertenencia a un grupo históricamente discriminado. Esta condición refuerza el deber estatal de protección reforzada y diferenciada.
124. Al emitir los documentos de identidad en México (desde la constancia de solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado hasta la tarjeta de residencia permanente) –actos que forman parte del cumplimiento del deber de protección internacional– las autoridades desconocieron la identidad de género de la quejosa, al consignar el nombre y sexo asignados al nacer. Este acto perpetúa la causa de la persecución que motivó su reconocimiento como refugiada y contradice de manera directa la coherencia del sistema de refugio, vulnerando derechos como la identidad, la personalidad jurídica, la dignidad, y generando afectaciones colaterales en el ejercicio de otros derechos (salud, trabajo, seguridad, entre otros).

sociales y culturales.

⁶⁶ Hathaway, James y Michelle Foster. Op.cit.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

125. La función de registrar, reconocer y garantizar la personalidad jurídica no es una facultad discrecional del Estado, sino una obligación que deriva directamente del principio de legalidad y del carácter público de estos servicios. El reconocimiento de la identidad legal de las personas forma parte de las funciones esenciales del Estado como garante de derechos y no puede quedar sujeta a vacíos normativos o decisiones individuales de las autoridades administrativas. En este sentido, el derecho al reconocimiento legal de la identidad –particularmente en materia migratoria– adquiere una dimensión estructural, ya que la documentación expedida por el Estado es el principal medio a través del cual las personas extranjeras pueden ejercer su personalidad jurídica en la vida cotidiana.
126. Esto cobra especial relevancia en contextos como el migratorio o el de refugio, donde la relación entre el Estado y la persona extranjera está mediada por un marco normativo que regula su permanencia, su tránsito y su estatus legal. En este marco, la documentación que emite el Estado acredita el reconocimiento de derechos a los que se tiene alcance, pero también constituye una condición necesaria para ejercerlos. Por tanto, negar o dificultar el reconocimiento de la identidad de género en esos documentos equivale a negar el ejercicio efectivo de la personalidad jurídica, situación que el derecho internacional y constitucional prohíben expresamente.

127. Con estas anotaciones previas, se procede a estudiar los conceptos de violación. Por orden metodológico, en primer lugar se analizarán las normas efectivamente impugnadas y su constitucionalidad para determinar si éstas prevén una exclusión normativa discriminatoria que vulnera los derechos de la quejosa (A). Una vez hecho esto, se examinará el oficio reclamado (B.). En esencia, como se argumentará en cada apartado, los conceptos de violación de la quejosa son **fundados** y suficientes para **otorgar el amparo** y la protección de la justicia federal.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

A. Análisis de las normas reclamadas

128. El marco normativo cuya constitucionalidad se cuestiona (conformado por el artículo 63 de la Ley de Migración, los diversos 167 del Reglamento de la Ley de Migración y los artículos 35, 55 y 56 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios) comparte un eje común: establecer la obligación de las personas extranjeras con condición de estancia regular en México de mantener actualizada su información personal ante el INM. Este principio de actualización responde a una necesidad de seguridad jurídica y trazabilidad dentro del Registro Nacional de Extranjeros, responsabilidad del INM conforme al artículo 63 de la Ley de Migración. La finalidad de estas normas es asegurar que la autoridad migratoria cuente con datos veraces y actuales sobre las personas extranjeras, permitiéndole ejercer eficazmente sus facultades de control, supervisión y protección de derechos.
129. Si bien los tres cuerpos normativos comparten esa finalidad común, cada una presenta una función distinta. La Ley de Migración, como norma de jerarquía superior, establece de forma general la obligación de las personas extranjeras de informar al INM sobre cualquier cambio en su estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo en un plazo no mayor a noventa días. Esta disposición tiene un carácter programático y no detalla los procedimientos ni requisitos específicos.
130. El Reglamento de la Ley de Migración desarrolla y precisa esa obligación. El artículo 167 establece los mismos plazos y los documentos que deben presentarse para acreditar cada tipo de modificación. En el caso del cambio de estado civil, por ejemplo, se requiere acta de matrimonio o sentencia de divorcio con fecha de ejecutoria; en el caso del cambio de nacionalidad, pasaporte del nuevo país o carta de naturalización. Con ello, el reglamento introduce un estándar de veracidad documental que obliga a

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

la persona extranjera a aportar prueba objetiva del cambio que desea notificar.

131. Por su parte, los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios tienen una naturaleza administrativa y operativa. Estos lineamientos convierten los preceptos legales y reglamentarios en procedimientos concretos que pueden llevarse a cabo en las oficinas del INM. Es ahí donde se detalla, por ejemplo, el trámite para notificar un cambio de nombre, o el procedimiento para reponer una tarjeta migratoria con datos actualizados. Aunque los trámites de notificación y reposición son distintos, en la práctica están íntimamente relacionados: la modificación de algún dato presente en la tarjeta de residente sólo es posible si la persona extranjera, además de notificar el cambio, presenta una solicitud de reposición acompañada de la documentación oficial que lo acredite. En este sentido, los lineamientos establecen que el nuevo documento migratorio solo podrá reflejar el cambio si la persona ha promovido formalmente la reposición.
132. Este conjunto normativo también tiene implicaciones jurídicas sustantivas más allá de la mera actualización administrativa y registral. La posibilidad de reflejar en los documentos migratorios cambios relativos al nombre, estado civil o nacionalidad constituye una vía para que las personas extranjeras accedan al reconocimiento pleno de su personalidad jurídica conforme a su identidad actual. En este sentido, el reconocimiento jurídico de la identidad –mediante la adecuación de los datos personales en documentos oficiales– es una manifestación concreta de la garantía de un derecho fundamental.
133. Esta dimensión sustantiva se aprecia con claridad en el caso de las modificaciones de nombre, que el orden jurídico nacional ha reconocido como un derecho humano en sí mismo, y no como una prerrogativa

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

discrecional del Estado⁶⁷. El nombre no se entiende como una simple etiqueta; es un elemento constitutivo de la identidad que acompaña a la persona y se proyecta en todos los aspectos de su vida cotidiana, incluidos aquellos relacionados con el ejercicio de derechos, la vinculación jurídica con otras personas y la interacción con las instituciones. En ese sentido, desde esta Suprema Corte se ha reconocido que la posibilidad de modificar el nombre conforme a la realidad social, familiar o de género de la persona forma parte del libre desarrollo de la personalidad, principio que ha sido elevado a rango constitucional⁶⁸. Sobre este punto ahondaremos más adelante.

134. Volviendo al análisis de las normas, como lo señaló la quejosa en sus conceptos de violación el marco normativo aplicable en materia migratoria establece procedimientos y obligaciones relacionados con la notificación de cambios personales –como el estado civil, el nombre o la nacionalidad–, pero no menciona expresamente el concepto de “género” o “sexo” como un dato susceptible de modificación ni como una categoría protegida que requiera atención específica por parte de las autoridades migratorias. En este aspecto es en lo que descansa la impugnación de constitucionalidad.

135. Al respecto, esta Primera Sala ha reconocido que, entre la infinidad de formas que puede adoptar la discriminación normativa, las más comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa. La discriminación por exclusión tácita de un beneficio tiene lugar cuando el legislador crea un

⁶⁷ Gutiérrez Dávila, Gabriela, Carlos Ernesto Alonso Beltrán y Erwin Máximo Arellano Torres. Derecho al nombre, cuaderno de jurisprudencia núm. 19. Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera edición, Ciudad de México, 2023.

⁶⁸ Así lo sostuvo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del amparo directo 6/2008, en la que se realizó un análisis detallado del derecho humano a la identidad, reconocido en el artículo 4º de la Constitución. En dicho precedente se afirmó que cada persona tiene derecho a decidir sobre los aspectos más íntimos de su vida conforme a su autonomía, lo cual incluye la determinación de su nombre como expresión de su identidad personal. Desde entonces, esta doctrina ha servido de base para proteger judicialmente los cambios de nombre motivados por el uso social, la realidad familiar o la identidad de género, bajo el entendimiento de que el respeto a la identidad autoasumida es condición necesaria para garantizar la dignidad humana. Véanse también amparos directos en revisión 2424/2011, 772/2012, 7529/2019 y 312/2022. Asimismo, los amparos en revisión 1317/2017, 101/2019, 155/2021 y 510/2021.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

régimen jurídico que implícitamente y, de forma injustificada, excluye de su ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa, lo que suele ocurrir, por ejemplo, cuando se establece a un determinado colectivo como destinatario de un régimen jurídico, sin hacer mención alguna de otro que se encuentra en una situación equivalente⁶⁹.

136. En este caso, los supuestos regulados no refieren directamente a las personas destinatarias de un régimen o a un grupo poblacional diferenciado –más allá de las personas extranjeras y las diferentes calidades migratorias que podrían tener– ni tampoco establecen una exclusión explícita de personas trans ni de quienes enfrentan incongruencias entre el sexo asignado al nacer y su identidad de género como tanto lo señalaron las autoridades en sus informes justificados. Los supuestos son cambios de situaciones *de iure o de facto* que pueden requerir la modificación de la tarjeta migratoria y de algún dato en el Registro Nacional de Extranjeros.

137. Sin embargo, la falta de previsión expresa para el reconocimiento y modificación del género/ sexo en los documentos migratorios no es neutral y genera una afectación diferenciada, específica y sistemática para las personas trans, así como para todas aquellas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. La consecuencia de esta exclusión tácita es que, al no existir un canal para solicitar el reconocimiento de su identidad de género ante la autoridad migratoria, estas personas quedan atrapadas en un limbo documental. En éste, su identidad jurídica reconocida por otras instancias, por ejemplo, no se reflejaría en sus documentos migratorios, afectando no sólo su acceso a derechos, sino

⁶⁹ Cfr. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, tesis aislada 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), décima época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, pág. 980, número de registro 2010500, con rubro: **IGUALDAD ANTE LA LEY. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA.**

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

también su libre desarrollo de la personalidad, dignidad y reconocimiento ante el Estado. Estas conclusiones se justificarán en la siguiente sección.

A.1. Exclusión tácita con impacto diferenciado como discriminación normativa indirecta sujeta a escrutinio estricto

138. Una de las violaciones que aduce la quejosa es al principio de igualdad y no discriminación. Conforme a la causa de pedir, dicha violación se expresa, sobre todo, como una distinción injustificada respecto de otras personas extranjeras que sí pueden modificar ciertos datos en su tarjeta migratoria –como el nombre, la nacionalidad o el estado civil– a través de procedimientos normativamente previstos.
139. Para estar en condiciones de analizar dichas violaciones, conviene recordar la jurisprudencia constitucional que en torno a este principio ha emitido esta Suprema Corte, así como la doctrina de organismos internacionales sobre la materia. El artículo 1º de la Constitución⁷⁰ reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación con base en categorías sospechosas que atenten contra la dignidad humana –como lo es el origen étnico, nacional o el género–, así como cualquier otra instancia que tenga como resultado el menoscabo de los derechos fundamentales de las personas.
140. Adicionalmente, la Corte Interamericana ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al *ius cogens*, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional⁷¹. Este principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos y, por consiguiente, los Estados

⁷⁰ Artículo 1º. [...] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

⁷¹ Corte Interamericana - Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, párrafo. 101.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

tienen la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, así como de combatir las prácticas discriminatorias⁷².

141. Ahora bien, esta Primera Sala ha referido que la igualdad como derecho fundamental se manifiesta en distintas vertientes. En su vertiente de igualdad formal, este derecho implica una protección contra distinciones o tratos arbitrarios, y se compone a su vez de la igualdad ante la ley –es decir, la igual aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades– e igualdad en la norma jurídica –que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que exige que las normas no contengan diferenciaciones injustificadas constitucionalmente o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio–⁷³.
142. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos cuando la ley da a las personas un trato diferenciado invocando un factor prohibido de discriminación –categoría sospechosa– o constitucionalmente inadmisibles. Esto quiere decir que, partiendo de una situación análoga original, los miembros de un grupo social reciben un trato desigual en comparación con los de otros grupos, sin justificación o razonabilidad.
143. También pueden dar lugar a actos discriminatorios indirectos, cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado diferencia o excluye de manera desproporcionada a personas o grupos en situación de desventaja, sin que exista para ello una

⁷² Op.cit. párrafo. 88 y 85.

⁷³ Cfr. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tesis jurisprudencial 1a./J. 126/2017 (10a.), décima época, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, pág. 119, número de registro 2015678, con rubro: **DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES.**

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

justificación objetiva y razonable⁷⁴. Se entiende entonces como discriminación indirecta aquellas normas, medidas o prácticas –sin distinción explícita– que producen efectos negativos e impacto desproporcionado para ciertos grupos vulnerables. Esto incluye a las prácticas que no están dirigidas directamente hacia los miembros de un grupo social, pero que tienen como resultado efectivo la obstaculización en el disfrute de sus derechos u otros resultados desventajosos para los miembros de ese grupo⁷⁵.

144. El caso que se nos plantea constituye una forma de exclusión tácita, no respecto de un grupo social explícitamente identificado, sino de un supuesto específico de modificación administrativa: el género. Sin embargo, esta omisión normativa no es neutral. Por el contrario, produce efectos diferenciados y desproporcionados en las personas trans, al impedirles reflejar su identidad de género en los documentos migratorios que acreditan su estancia legal en el país.
145. Aunque las autoridades responsables sostienen que las normas migratorias no establecen distinciones basadas expresamente en el género –y por tanto no incurren, según su perspectiva, en una vulneración a la igualdad formal basada en una categoría sospechosa–, lo cierto es que la exclusión implícita del supuesto de cambio de género afecta de manera específica a un grupo históricamente vulnerable justamente en razón de su identidad de género. Esa exclusión impacta precisamente a personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, lo que las coloca en una situación de desigualdad estructural frente a otras personas extranjeras que sí pueden modificar sus datos personales conforme a los procedimientos previstos.

⁷⁴ Ibid. Véase también Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Legislar sin discriminación, editado por Carlos Sánchez Gutiérrez, octubre de 2013, pág. 61-63, así como lo sostenido en el Amparo en Revisión 1079/2018, discutido y aprobado por unanimidad en sesión de la Primera Sala de este Alto Tribunal en fecha 10 de abril de 2019.

⁷⁵ Solís, Patricio. Discriminación estructural y desigualdad social, Consejo Nacional para prevenir la discriminación, CEPAL, 2017, pág. 31.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

146. Por ello, aun cuando el género no sea una categoría explícitamente mencionada por la norma, su ausencia normativa se traduce en una afectación concreta por motivos de género. De ahí que esta categoría sospechosa se encuentre directamente involucrada en el análisis constitucional y deba activar un escrutinio más estricto respecto de la justificación y proporcionalidad de la omisión normativa identificada.
147. En este sentido, es importante recordar que la Constitución permite que, en algunos ámbitos, el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta a los jueces y juezas constitucionales a ser especialmente exigentes cuando deban determinar si se han respetado las exigencias derivadas del principio de igualdad⁷⁶. Para ello es necesario distinguir la intensidad con la cual deben evaluarse las distinciones materialmente legislativas a partir de la relación, materia o ámbito sobre el cual se proyectan los reclamos de igualdad, para así estar en condiciones de determinar qué tan intenso o qué tan laxo debe ser el escrutinio por realizar⁷⁷.
148. A partir del artículo 1º constitucional, la persona juzgadora deberá ser especialmente exigente con los y las legisladoras en dos hipótesis básicas: a) cuando la norma legal analizada utilice para la configuración de su contenido normativo los criterios clasificatorios allí enumerados – categorías sospechosas– y b) cuando la norma analizada tenga una proyección central sobre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución⁷⁸. En estos casos se deberá realizar un escrutinio estricto, que exige determinar: (i) si la clasificación analizada persigue una finalidad

⁷⁶ Cfr. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tesis jurisprudencial 1a./J. 55/2006, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXIV, septiembre de 2006, pág. 75, número de registro 174247, cuyo rubro es: **IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.**

⁷⁷ Cfr. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, tesis aislada 1a. CII/2010, (9a.), novena época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, pág. 185, número de registro 163766, con rubro y texto: **PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA INTENSIDAD DEL ESCRUTINIO**

⁷⁸ *Ibid.*

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

constitucionalmente imperante; (ii) si resulta idónea para su consecución (es decir, si está estrechamente vinculada con la finalidad) y (iii) si constituye, además, la medida menos restrictiva de otros bienes y derechos.

149. Este escrutinio riguroso, en casos de discriminación indirecta a un grupo de personas en especial situación de protección en el orden jurídico nacional por corresponder a grupos discriminados históricamente en virtud de una categoría sospechosa implica (i) identificar una norma aparentemente neutral, (ii) que esa norma genere un impacto desproporcionado al grupo de personas especialmente protegidas y (iii) que dicho impacto no responda a una finalidad constitucionalmente imperiosa, conforme a lo narrado en el párrafo anterior.

150. Antes de proceder con el escrutinio, se deberá proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado como efecto de la aplicación de la norma: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares⁷⁹. En ese sentido, a lo largo de esta sentencia se ha mostrado de manera entrelazada que el marco normativo aplicable sí contempla supuestos análogos al del cambio de género, en los cuales las personas extranjeras pueden modificar datos esenciales que impactan directamente en su identidad y en el reconocimiento pleno de su personalidad jurídica. Tal es el caso de los cambios de nombre, estado civil o nacionalidad, los cuales están expresamente previstos y regulados en los procedimientos migratorios como actualizaciones legítimas y protegidas.

⁷⁹ Cfr. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, tesis jurisprudencial 1a./J. 44/2018 (10a.), décima época, Libro 56, julio de 2018, Tomo I, pág. 171, número de registro 2017423 con rubro: **DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO.**

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

151. La exclusión del supuesto de cambio de género, en contraste, coloca a las personas trans en una situación de distinción injustificada dentro de un mismo régimen jurídico diseñado para permitir la actualización de información personal sustantiva a personas extranjeras. Esta ausencia normativa, por tanto, produce una distinción relevante desde la perspectiva del principio de igualdad, que activa la necesidad de un escrutinio constitucional más riguroso. Es cierto, muchos de los elementos de este escrutinio ya se han desarrollado a lo largo de estas páginas; sin embargo, a pesar de ser reiterativos para mayor claridad, se procede con su análisis conforme a los lineamientos fijados.
152. **Normas aparentemente neutras.** En cuanto al primer elemento, las normas que regula los supuestos de modificación de datos personales en los documentos migratorios –como el estado civil, la nacionalidad o el nombre– son en apariencia neutral, pues no contiene una exclusión explícita respecto al cambio de género. Tampoco hacen referencia expresa a ninguna categoría sospechosa como el género, identidad de género o expresión de género. Sin embargo, dicha omisión, en su neutralidad aparente, excluye tácitamente del procedimiento un supuesto análogo que incide directamente en la identidad de las personas: el cambio de un dato en el documento migratorio para reconocer la identidad de género.
153. **Impacto desproporcionado.** Esta exclusión produce un impacto desproporcionado en un grupo históricamente discriminado y especialmente protegido por el derecho constitucional y convencional: las personas trans. La omisión normativa coloca a estas personas en una situación de desventaja estructural respecto a otras personas extranjeras cisgénero que sí pueden modificar información esencial de sus documentos migratorios. Como se ha señalado previamente, el marco jurídico prevé procedimientos para reflejar cambios relevantes en la identidad jurídica (como el estado civil, el nombre o la nacionalidad), pero guarda silencio respecto al género, lo que impide a las personas trans

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

adecuar su documentación oficial a su identidad de género, con los efectos legales, sociales y personales que ello conlleva. Ello, además, tiene grandes consecuencias respecto al reconocimiento legal de la identidad de género como derecho fundamental.

154. **Finalidad imperiosa.** Finalmente, no se advierte que esta exclusión responda a una finalidad constitucionalmente imperiosa que pueda justificar el trato diferenciado. El objetivo de mantener la seguridad jurídica en los registros migratorios, así como la certeza documental, no se ve comprometido por permitir que el género sea un dato actualizable. Por el contrario, la negativa tácita a reconocer el cambio de género perpetúa situaciones de invisibilidad y vulnerabilidad, sin que exista una justificación que supere el umbral constitucional de proporcionalidad.
155. En consecuencia, el análisis arroja que la exclusión del supuesto de cambio de género en los procedimientos de modificación de datos migratorios constituye un caso de discriminación indirecta. Se trata de una norma aparentemente neutral que impacta desproporcionadamente a un grupo históricamente discriminado –las personas trans–, sin que exista una razón constitucionalmente válida que justifique dicha exclusión ni que satisfaga los criterios de idoneidad y necesidad. Este resultado activa el deber reforzado de protección que impone el artículo 1º constitucional a todas las autoridades, en especial cuando se encuentran frente a grupos en situación de vulnerabilidad estructural.
156. Ante la imposibilidad de realizar una interpretación conforme frente a normas discriminatorias⁸⁰ –lo cual, además, será relevante en el análisis del acto reclamado– esta Primera Sala procede a **declarar la inconstitucionalidad de los artículos 63 de la Ley de Migración; 167 de su Reglamento; así como los artículos 35, 55 y 56 de los**

⁸⁰Tesis: 1a./J. 47/2015 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 394. Registro digital: 2009726, de rubro: "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR."

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios en tanto que excluyen con efectos discriminatorios a las personas trans de la posibilidad de modificar la tarjeta de residencia para reflejar en el demarcador correspondiente la identidad de género.

A.2. Vulneración al derecho a la identidad y personalidad jurídica

157. El impacto desproporcionado de las restricciones documentales recae directamente en el derecho a la identidad y reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas refugiadas. Si bien las normas se declararon inconstitucionales por discriminatorias, se estudia el argumento relativo a esta vulneración para mayor exhaustividad en la sentencia.
158. Es fundamental establecer que la población extranjera, independientemente de su condición jurídica, goza de los mismos derechos y garantías que las personas nacionales⁸¹. La Constitución Mexicana reconoce expresamente los derechos de las personas migrantes a través del concepto de extranjería, estableciendo en el artículo 33 que las personas extranjeras son aquellas que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional, y que éstas gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución⁸², incluyendo aquellos reconocidos en tratados internacionales.
159. Para analizar adecuadamente el catálogo de derechos reconocidos, resulta indispensable atender al contexto subjetivo del caso, lo cual implica hacer operativos reclamos interseccionales que consideren las múltiples

⁸¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”. De fecha 8 de septiembre de 2005. Párr. 155. Véase también “Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano” en Derechos de las personas migrantes, Comisión Nacional de Derechos Humanos.

⁸² Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”. De fecha 8 de septiembre de 2005. Párr. 155. Véase también “Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano” en Derechos de las personas migrantes, Comisión Nacional de Derechos Humanos.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

vulnerabilidades que enfrentan las personas refugiadas. En el caso específico de personas refugiadas, este reconocimiento cobra especial importancia cuando se trata de adecuaciones relacionadas con la identidad de género. Permitir que una persona refugiada actualice sus datos personales en sus documentos oficiales, incluida su tarjeta migratoria, constituye una forma de afirmar su dignidad y autonomía, asegurando que su identidad se vea reflejada en todos los actos jurídicos que celebre en territorio nacional.

160. Como se dijo en los amparos en revisión 665/2019 y 114/2020⁸³ la doctrina constitucional de esta Suprema Corte ha resaltado que el derecho a la identidad, previsto en el artículo 4° constitucional, es inherente al ser humano y tiene como sustento la dignidad. Por tanto, constituye un derecho cuya tutela y ejercicio es indispensable para que la persona configure su individualidad, siendo también necesario para el ejercicio de las relaciones del individuo con la familia, la sociedad y el Estado.
161. El derecho a la identidad está íntimamente asociado con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, pues la persona actúa en nombre propio y con el carácter de única en la sociedad y para el ordenamiento jurídico. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, previsto por los artículos 1° constitucional, 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁸⁴ y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁸⁵, tiene como contenido propio el reconocimiento de la capacidad jurídica de ser titular de derechos y obligaciones, así como la capacidad de ejercerlos, incluyendo la capacidad para actuar ante los órganos del Estado.

⁸³ Resueltos por la Primera Sala en sesión de 22 de septiembre de 2021 por unanimidad de cuatro votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero con salvedades en las consideraciones, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente). Ausente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

⁸⁴ Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

⁸⁵ Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

162. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es interdependiente de otros derechos, pues no es posible ser titular de derechos y obligaciones si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos⁸⁶. La doctrina especializada y diversos organismos internacionales han resaltado que, para garantizar este derecho, es necesario un adecuado y eficiente registro y, por ende, un sistema de identificación de todas las personas⁸⁷ conforme a su identidad que les permita el goce de sus derechos y su inclusión general en la vida del Estado.

163. Aunque la titularidad de derechos traiga consigo la personalidad jurídica, no se trata únicamente de declararla, sino también de tornarla operativa y consistente con la identidad de la persona. El derecho a la personalidad jurídica tiene dos dimensiones interdependientes: una material y otra formal, ambas necesarias para la materialización y el reconocimiento efectivo del derecho fundamental⁸⁸. La dimensión material se relaciona con la efectiva titularidad de los derechos de la persona, reconociendo que la persona es titular de derechos y obligaciones en el ordenamiento jurídico⁸⁹. Por su parte, la dimensión formal o instrumental refiere a contar con las herramientas y condiciones para ejercer el derecho del que la persona es titular sin discriminación y en condiciones dignas.

164. Esta dimensión formal reconoce que la titularidad del derecho resultará inoperante o ilusoria si la persona carece del medio o instrumento idóneo para acreditarlo y, por tal motivo, se ve privada *de iure o de facto* de personalidad ante el orden jurídico. Los medios o instrumentos a los que se refiere esta dimensión incluyen el acta de nacimiento, alguna

⁸⁶ Corte Interamericana. Propuesta de Modificación a la Constitución de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC 4/84 del 19 de enero de 1984, serie A n4.

⁸⁷ Álvarez, Rosa María. *Derecho a la identidad*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, pág. 122.

⁸⁸ Para estas consideraciones, nos basaremos en el voto razonado de Sergio García Ramírez en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos *Comunidad Sawhoyamaya vs. Paraguay* del 29 de marzo de 2006.

⁸⁹ Corte Interamericana. *Sentencia Comunidad Sawhoyamaya vs. Paraguay* del 29 de marzo de 2006, serie C. no. 146, voto razonado de Sergio García Ramírez, párrafo 26.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

identificación oficial o cualquier documento necesario para acceder a los servicios del Estado y ejercer los derechos frente a terceros.

165. En el caso específico de las personas refugiadas, la tarjeta de residencia permanente constituye el reconocimiento formal del Estado mexicano hacia aquellas personas extranjeras que, por diversos motivos, han decidido hacer de este país su hogar. Según el artículo 54 de la Ley de Migración, esta condición de estancia se otorga a extranjeros que se ubican en supuestos específicos, siendo uno de los más significativos para el caso “por (...) reconocimiento de la condición de refugiado previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables”. Asimismo, el artículo 48 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece que “a los refugiados (...) se les concederá la residencia permanente en los Estados Unidos Mexicanos”. Esta disposición revela la naturaleza humanitaria del sistema migratorio en relación con el régimen de refugio, al reconocer que algunas personas no pueden regresar a sus países de origen y necesitan una solución duradera.

166. La esencia de la residencia permanente radica en su carácter indefinido y en los amplios derechos que confiere. Como establece el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Migración, “la tarjeta que acredita la condición de estancia de residente permanente tendrá una vigencia indefinida⁹⁰”, lo que significa que, una vez obtenida, la persona puede permanecer en territorio mexicano sin limitaciones temporales. El artículo 59 de la Ley de Migración complementa esta visión al establecer que “obtenida la tarjeta de residencia, los residentes temporales y permanentes tendrán derecho a obtener de la Secretaría la Clave Única de Registro de Población”, insertándolos formalmente en el sistema de identificación nacional.

⁹⁰ Salvo en casos de menores de edad, niños, niñas o adolescentes. Al respecto, el artículo 157 del Reglamento establece una excepción al carácter indefinido de la tarjeta: “salvo para el caso de personas extranjeras menores de edad, quienes deberán renovar la tarjeta cada año hasta que cumplan tres años. A partir de esa edad, el documento migratorio debe renovarse cada cuatro años hasta que su titular cumpla la mayoría de edad”.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

167. El carácter especial de la residencia permanente para refugiados se manifiesta también en aspectos prácticos. Según el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Migración, “en el caso de las personas extranjeras a quienes se haya otorgado la condición de estancia de residente permanente por haberles reconocido la condición de refugiado”, la tarjeta de residencia que les expida el Instituto acreditará el permiso para salir del territorio nacional y para reingresar al mismo durante su vigencia.
168. También, conforme al artículo 157, la tarjeta implica que la persona cuenta con permiso de trabajo en el caso de ser mayores de edad”. Esto significa que los residentes permanentes pueden trabajar en cualquier actividad económica sin necesidad de permisos adicionales, emprender negocios, adquirir propiedades, y circular libremente dentro y fuera del país. En conclusión, la tarjeta de residencia permanente en México, y particularmente para las personas refugiadas, representa un documento de identidad y un instrumento de integración social.
169. La disposición de estos medios o instrumentos documentales constituye una condición implícita para la efectividad del reconocimiento explícito del derecho a la personalidad y los derechos derivados⁹¹. Bajo esta concepción, el ejercicio efectivo de la personalidad jurídica existe como mayor garantía de acceso a otros derechos, tales como la salud, la educación, el trabajo y otros derechos sociales, económicos y culturales⁹².
170. Con respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica de migrantes y personas en situación de movilidad, el objetivo cuarto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular establece el compromiso estatal de velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su

⁹¹ Corte Interamericana. *Sentencia Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay* del 29 de marzo de 2006, serie C. no. 146, voto razonado de Sergio García Ramírez, párrafo 27.

⁹² Álvarez, pág. 118. Op.cit.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

identidad jurídica y la documentación adecuada, como medio de empoderarlos para que ejerzan efectivamente sus derechos humanos.

171. Sin embargo, dicha documentación no es adecuada si los datos personales no corresponden con la identidad de género de la quejosa. Como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-24/17, la base misma de los derechos individuales es el derecho de las personas a ser reconocidas como únicas y diferenciables de los demás. La Corte determinó que el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado y ante la sociedad se traduce por su facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones, en estrecha relación con la libre determinación, la percepción de uno mismo, la dignidad y la libertad.
172. Además, el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género ha señalado que la falta de reconocimiento jurídico niega la identidad de las personas afectadas hasta el punto de provocar una ruptura fundamental de las obligaciones estatales. Las personas trans y de género diverso cuya identidad no goza del debido reconocimiento sufren denegación del derecho a la salud, discriminación y exclusión en contextos educativos, discriminación en el empleo, la vivienda y el acceso a la seguridad social, violaciones de los derechos del niño, y restricciones arbitrarias de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacíficas⁹³.
173. En este sentido, el reconocimiento legal de la identidad implica no sólo la inscripción inicial de datos como el nombre, sexo/género, nacionalidad y filiación, sino también la posibilidad de su modificación ulterior, cuando esa adecuación sea necesaria para respetar la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la vida privada de la persona. Negar o restringir injustificadamente la posibilidad de adecuar documentos oficiales, como lo

⁹³ A/73/152, 12 de julio de 2018: Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

es la tarjeta de residencia permanente –y como se desprende de las normas analizadas– puede traducirse en una vulneración directa del derecho a la personalidad jurídica, especialmente cuando ello impide el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud o el trabajo o la seguridad jurídica.

174. Por lo mismo, son **fundados** los argumentos de la quejosa por los que señala que el sistema normativo de la Ley de Migración, al no prever la posibilidad de modificar el demarcador de género/ sexo en su tarjeta de residencia permanente es inconstitucional, discriminatorio y contrario al derecho de identidad y personalidad jurídica.

B. Análisis del oficio impugnado

175. El oficio impugnado por la quejosa ***** tiene el contenido siguiente.

“Me refiero al escrito recibido en la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio el día 13 de julio del presente año, mediante el cual solicita el cambio de datos de identificación conforme a su identidad de género en la tarjeta de residencia permanente, en este sentido, con fundamento en los artículos 124 fracción II inciso b) y 130 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, tengo a bien informarle lo siguiente:

A fin de encontrarnos en posibilidad de brindar una atención integral, esta unidad administrativa solicitó a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de ayuda para Refugiados mediante oficios ***** de fecha 28 de julio de 2021 e ***** de fecha 21 de septiembre del año en curso, establecer el procedimiento que deberá seguir para el cambio de datos en la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado, con la finalidad de que en su momento, pueda ingresar el trámite migratorio correspondiente ante este Instituto.

Derivado de lo anterior, mediante oficio ***** , de fecha 28 de septiembre de 2021, mismo que se anexa al presente para pronta referencia, signado por el Lic. Fabián Hidalgo Martínez, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), remitió el procedimiento que deberá seguir la persona extranjera para encontrarse en posibilidad de

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

modificar sus datos personales en la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que deberá acudir a las instalaciones (se inserta el domicilio) en un horario de las 9:00 am a las 18:00 horas, con la finalidad de que sea recabada su petición, en su caso se le pueda orientar sobre los trámites correspondientes, o bien, se le puedan realizar las entrevistas a que haya lugar y poder determinar la asistencia institucional que se le otorgará

Finalmente, una vez que sea atendida por la COMAR y se emita la constancia correspondiente, le solicitamos ponerse en contacto con la Directora de Regulación Migratoria [datos de contacto] con la finalidad que se le asigne cita para su atención.

Por otra parte, le informo que a fin de realizar los cambios pertinentes en su documentación migratoria, la vía de acceso es a través de los trámites migratorios que se encuentran previstos en los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, siendo estos 1) notificación de cambio de nombre 2) reposición de documento migratorio.

Por lo que respecta a su solicitud de conformidad con lo preceptuado por el artículo 3 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, dicha petición se debe llevar a cabo a través del trámite migratorio correspondiente, con las formalidades y en el lugar que para ello se establecen dentro de cada una de las fichas de trámite, así como presentado los documentos que acrediten los requisitos para el trámite que corresponda, es decir, que resulta necesario realizar el llenado de la solicitud de trámite en línea, entregar los documentos que acrediten los requisitos correspondientes, así como presentar el trámite migratorio ante una oficina de atención a trámites del Instituto Nacional de Migración.

Para la notificación de cambio de nombre, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 56 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, deberá presentar los siguientes requisitos:

1. Solicitud de trámite, llenado a través de la siguiente liga electrónica <https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html> con firma autógrafa de la persona solicitante.
2. Carta firmada por la persona extranjera en la que bajo protesta de decir verdad manifieste el cambio de nombre y género señalando expresamente el anterior y el nuevo dato que corresponda, se adjunta formato para mayor referencia.
3. Original y copia de la tarjeta de residente;
4. Documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR) en la que conste el otorgamiento de la condición de refugiado a nombre de *****.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

*Se adjunta ficha de trámite de notificación de cambios, para mayor referencia.

En cuanto a trámite de reposición de documento migratorio, el artículo 35 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios establece los siguientes requisitos:

1. Solicitud de trámite, deberá ser llenada a través de la siguiente <https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html> con firma electrónica autógrafa.
2. Copia del documento emitido por COMAR en el que obre el reconocimiento de la condición de refugiado con los datos de identidad de la persona extranjera.
3. Documento migratorio, en su caso la tarjeta de residente permanente”

*Se adjunta ficha de trámite de expedición de documento por reposición, para mayor referencia

Resulta importante mencionar que, las personas extranjeras que obtengan de la Secretaría de Gobernación a través de la COMAR, el reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de Protección Complementaria, no pagarán derechos migratorios, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 18-B de la Ley Federal de Derechos.

Por otra parte, le comento que es fundamental que el trámite migratorio lo presente de manera personal, ya que una vez que éste se resuelva, la autoridad migratoria recabará los datos biométricos, es decir, la toma de huellas y fotografías, para la expedición del documento migratorio correspondiente.

Por otra parte, le comento que para la modificación a la Clave Única de Registro de Población, respecto del carácter 11º, ésta se realizará una vez que se resuelva el trámite migratorio de reposición de documento migratorio y en el mismo acto se realizará la adecuación en el Registro Nacional de Extranjeros.”

176. El oficio ***** de fecha 30 de septiembre de 2021 constituye la respuesta formal del Director General de Regulación y Archivo Migratorio del INM a la solicitud de modificación de datos de identidad de género presentada por la quejosa ***** . En este documento, la autoridad migratoria establece un procedimiento condicionado que requiere que la quejosa acuda primero a las instalaciones de COMAR para obtener una

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

constancia actualizada, y solo después de este trámite previo podrá solicitar cita con la Dirección de Regulación Migratoria para proceder con la modificación de su documentación migratoria.

177. El oficio detalla específicamente dos rutas administrativas disponibles: la notificación de cambio de nombre (artículo 56 de los Lineamientos) y la reposición de documento migratorio (artículo 35 de los Lineamientos). Para ambos procedimientos, la autoridad establece como requisito indispensable la presentación del “documento emitido por COMAR en el que conste el otorgamiento de la condición de refugiado con los datos de identidad de la persona extranjera” actualizados conforme a su identidad de género.
178. Es importante señalar que respecto a las normas que sustentan esta respuesta –específicamente los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios ya declarados inconstitucionales por excluir la modificación de género como derecho fundamental–, el acto de aplicación contenido en este oficio debe seguir el mismo destino de inconstitucionalidad. Frente a estas disposiciones normativas que omiten el reconocimiento del derecho a la identidad de género, no resulta aplicable la interpretación conforme, de acuerdo con diversos precedentes de esta Primera Sala.
179. Al respecto, se reconoce y debe valorarse positivamente el esfuerzo institucional desplegado por las autoridades migratorias mexicanas, quienes, enfrentadas a un marco normativo estructuralmente limitado e insuficiente para atender las necesidades específicas de las personas trans extranjeras, demostraron una búsqueda genuina de soluciones para garantizar los derechos humanos fundamentales de la quejosa. La respuesta contenida en el oficio impugnado refleja una intención institucional clara de encontrar alternativas procedimentales viables que, si

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

bien no se podían desprender de las normas citadas, buscaban materializar la modificación de identidad de género solicitada.

180. Sin embargo, al implementar esta solución administrativa, la autoridad migratoria vulneró principios fundamentales de legalidad y debido proceso, generando una afectación específica de la cual la quejosa se dolió legítimamente. En específico, **es fundado** en su causa de pedir, el argumento por el cual se denuncia la falta de fundamentación adecuada pues, efectivamente, de lo estudiado en la sección anterior, las normas no señalaban el supuesto que la autoridad quiso encontrar en ellas.
181. Esta Primera Sala observa, no obstante, que éste no es el único argumento presente en los conceptos de violación para quejarse del contenido del oficio. Frente a este acto de aplicación, la quejosa argumenta (i) que la respuesta del INM vulnera múltiples derechos fundamentales al condicionarle la modificación de su tarjeta de residencia permanente a que previamente modifique su constancia de reconocimiento de refugiada ante COMAR, sin que exista un procedimiento claro para tales efectos. Esta práctica, sostiene, viola sus derechos a la dignidad humana, identidad personal (incluida la de género), al nombre, libre desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica y el principio de igualdad y no discriminación.
182. En segundo lugar (ii), considera que la respuesta del INM es evasiva porque traslada la responsabilidad a otra autoridad (COMAR) sin ofrecer una solución integral. Argumenta que el INM, como autoridad que maneja el Registro Nacional de Extranjeros y emite documentos de identificación para personas extranjeras, tiene la competencia y obligación de garantizar directamente su derecho a la identidad.
183. Por último, (iii) sostiene que la tarjeta de residencia permanente debe considerarse como un documento de identidad primigenio para personas extranjeras en México, equivalente al acta de nacimiento para mexicanos,

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

ya que contiene todos los elementos identificatorios esenciales (fotografía, CURP, nombre completo, sexo, etc.). Por tanto, debería poder modificarse directamente para reflejar su identidad de género, sin depender de modificaciones previas en otros documentos.

184. Lo anterior implica estudiar si, en el caso, el procedimiento que referencia el INM es adecuado, lo cual, principalmente, implica definir si es necesario modificar la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado para estar en posibilidad de modificar la tarjeta de residencia permanente.
185. Ahora bien, desde el **amparo en revisión 1317/2017**, esta Primera Sala estableció criterios fundamentales sobre cómo debe desarrollarse el procedimiento para la rectificación de datos –en ese caso, en el acta de nacimiento– cuando una persona busca adecuar su identidad de género. En el caso, determinamos que el procedimiento ideal debe ser de naturaleza materialmente administrativa, es decir, un trámite sencillo y directo que no requiera las formalidades propias de un juicio.
186. Como explica la resolución, “la Corte Interamericana ha reconocido que el procedimiento más idóneo o que mejor se ajusta para tal efecto es el de naturaleza materialmente administrativa o notarial, dado que un proceso de carácter jurisdiccional (formal y materialmente jurisdiccional) eventualmente puede incurrir, en algunos Estados, en excesivas formalidades y demoras que se observan en los trámites de esa naturaleza”.
187. En ese caso, a la luz del parámetro de regularidad, establecimos cinco características esenciales que debe cumplir cualquier procedimiento de rectificación de identidad de género para considerarse constitucional y respetuoso de los derechos humanos.
188. Primero, el procedimiento debe estar enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida. Esto significa que no puede limitarse únicamente al cambio de nombre, sino que debe permitir la modificación

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

de todos los datos relevantes, incluyendo el sexo registrado y, cuando sea necesario, la fotografía en los documentos de identidad. Fuimos enfáticos al señalar que “se deben desplegar los esfuerzos para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de género auto-percibida en los registros, así como en los documentos de identidad, no tengan que emprender varios trámites ante una multiplicidad de autoridades”.

189. El segundo requisito fundamental es que el procedimiento debe estar basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante. En el amparo en revisión 1317/2017 se establece claramente que no se pueden exigir “requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes”⁹⁴. La resolución explica que estos certificados “tienen un carácter invasivo y ponen en tela de juicio la adscripción identitaria llevada a cabo por la persona, pues descansan en el supuesto según el cual tener una identidad contraria al sexo que fue asignado al nacer constituye una patología”.
190. La tercera característica esencial es la confidencialidad. El procedimiento y sus resultados deben mantenerse en reserva, y los nuevos documentos no deben evidenciar que hubo un cambio de identidad de género. Como señalamos “tanto los procedimientos, como las rectificaciones realizadas a los registros y los documentos de identidad de conformidad con la identidad de género auto-percibida, no deben ser de acceso público, ni tampoco deben figurar en el mismo documento de identidad”. Esta protección es crucial porque la publicidad no deseada sobre un cambio de identidad de género, consumado o en trámite, puede poner a la persona solicitante en una situación de mayor vulnerabilidad a diversos actos de discriminación en su contra.

⁹⁴ Ello es consistente con los Principios de Yogyakarta, promulgados en 2006 y revisados en 2017, que establecen estándares fundamentales para la protección de personas LGBTIQ+. El Principio 3 sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica establece que la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, dignidad y libertad. Crucialmente, establece que ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

191. El cuarto requisito es que los procedimientos deben ser expeditos y, en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad. Reconocimos que “el grado de afectación que puede tener este tipo de procedimientos de cambio de nombre y de adecuación a la identidad de género sobre las personas, es de tal magnitud que los mismos deben llevarse a cabo con la mayor celeridad posible”. Además, establecimos que estos trámites “deben ser gratuitos o por lo menos tender a ser lo menos gravosos posibles para las personas interesadas en los mismos, en particular si se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad”.
192. Finalmente, el quinto estándar establece que no se pueden exigir intervenciones quirúrgicas ni tratamientos hormonales para el reconocimiento legal de la identidad de género. El precedente es categórico al afirmar que “el procedimiento de solicitud de cambio de nombre y adecuación de la imagen de la referencia al sexo o género, en los registros y documentos de identidad, no podrá requerir que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas totales o parciales ni terapias hormonales, esterilizaciones o modificaciones corporales”. La razón es simple: las personas trans pueden, si así lo desean, construir su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas.
193. Estos requisitos o estándares de adecuación, efectivamente se desarrollaron para el caso de rectificación de acta de nacimiento frente a una oficina de Registro Civil. Este caso es ligeramente distinto, no necesariamente en cuanto al parámetro fijado, sino respecto al documento que se busca cambiar y lo que las autoridades consideran el documento primigenio (la cual no puede ser el acta de nacimiento ni tampoco puede implicar acudir a un registro que no tiene constancia alguna de la identidad de la persona refugiada). Sin embargo, en todo caso, el procedimiento que se considere debe cumplir con estas características.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

194. Ahora bien, la secuencia normativa plasmada en el oficio que establece la necesidad de modificar primero la constancia de reconocimiento de refugiado ante COMAR y posteriormente proceder con el cambio de documentación migratoria ante el INM encuentra justificación en la estructura coherente del sistema jurídico mexicano de protección a refugiados, aunque debe implementarse de manera automática y coordinada para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales.
195. El orden COMAR-INM se sustenta en la arquitectura institucional establecida por la legislación especializada. El artículo 48 de la Ley sobre Refugiados establece que “a los refugiados y aquellos extranjeros que se les otorgue protección complementaria se les concederá la residencia permanente en los Estados Unidos Mexicanos”, mientras que el artículo 87 del Reglamento especifica que “el Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables, otorgará a los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, la condición de residente permanente”.
196. Esta secuencia refleja una lógica jurídica coherente: COMAR es la autoridad especializada que determina y certifica la condición de refugiado, generando el acto administrativo originario que constituye el fundamento jurídico para que el INM otorgue la documentación migratoria correspondiente. El artículo 15, fracción III del Reglamento de la Ley sobre Refugiados otorga expresamente a COMAR la competencia para “resolver sobre el reconocimiento de la condición de refugiado”, mientras que la fracción X le asigna llevar “un registro actualizado de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria”.
197. La justificación normativa de esta secuencia, además, radica en el principio de especialidad administrativa. COMAR, como órgano especializado en protección internacional, posee la *expertise* técnica y el mandato

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

específico para evaluar y certificar las circunstancias que caracterizan la condición de refugiado, incluyendo los elementos identitarios que pueden haber sido objeto de persecución. El artículo 67 del Reglamento establece que “la Coordinación informará al refugiado sobre sus derechos y obligaciones y le orientará sobre los programas y servicios públicos para atender sus necesidades inmediatas”, lo que incluye naturalmente la adecuación de la identidad de género cuando esta ha sido causa de la persecución que justifica la protección internacional.

198. Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que adquirir documentación legal precisa es particularmente desafiante para personas trans, de género no conforme e intersex desplazadas forzadamente, cuyo género autodeterminado a menudo no se refleja en documentos oficiales emitidos por autoridades gubernamentales en sus países de origen. En países donde a los no nacionales no se les permite hacer cambios legales a su marcador de género en la documentación oficial, esto crea problemas serios cuando deben presentar documentos de identificación en puestos de control, puertos de entrada, acceso a servicios gubernamentales, o al solicitar permisos de residencia, alojamiento y acceso a servicios nacionales de salud, bancarios, empleo y educación⁹⁵.

199. Además, las Directrices de ACNUR sobre Protección Internacional No. 9 reconocen que las personas trans cuya autoidentificación y apariencia física no coinciden con el sexo legal en la documentación oficial están en riesgo particular. La transición para alterar el sexo de nacimiento no es un proceso accesible para la mayoría de las personas y puede involucrar una gama de ajustes de diferentes tipos⁹⁶. Dado que COMAR es la autoridad

⁹⁵ ACNUR. 2021 Global Roundtable on Protection and Solutions for LGBTIQ+ People in Forced Displacement - Summary Conclusions, UN High Commissioner for Refugees, junio de 2021.

⁹⁶ ACNUR. Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/12/01, UN High Commissioner for Refugees, 23 de octubre de 2012.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

especializada en materia de refugio, está mejor posicionada para observar estas problemáticas durante el proceso de refugio.

200. Por su parte, el INM opera como autoridad ejecutora de las determinaciones de COMAR en materia migratoria. El artículo 59 de la Ley de Migración establece que “los solicitantes de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado, que sean determinados como apátridas o que se les otorgue protección complementaria, obtendrán su tarjeta de residencia permanente a la conclusión del procedimiento correspondiente.” Esta disposición confirma que la documentación migratoria se expide con base en las determinaciones previas de la autoridad especializada.
201. La secuencia procedimental garantiza la coherencia entre los documentos que integran el expediente de la persona refugiada y evita inconsistencias que podrían generar inseguridad jurídica. El artículo 63 de la Ley de Migración establece que “el Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información relativa a todos aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de residente temporal o de residente permanente”, por lo que la información debe ser congruente entre las diferentes fuentes documentales. Esta coherencia resulta especialmente relevante para personas trans refugiadas, ya que la discordancia entre documentos podría exponerlas a situaciones de discriminación o cuestionamiento de su estatus legal.
202. Sin embargo, la justificación normativa de esta secuencia no debe traducirse en cargas procedimentales irrazonables para las personas refugiadas. El sistema debe operar de manera automática y coordinada, donde la modificación de la constancia de COMAR genere automáticamente la actualización correspondiente en la documentación migratoria del INM, sin requerir trámites adicionales por parte de la persona interesada.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

203. El artículo 85 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados establece el marco para esta coordinación automática, señalando que “la Coordinación realizará gestiones ante las dependencias competentes en los trámites y servicios que el refugiado esté solicitando, tales como registro civil, servicios educativos y de seguridad social, así como cualquier otro programa público que busque facilitar su integración al país”. Esta disposición fundamenta la obligación de COMAR de gestionar directamente ante el INM la actualización de la documentación migratoria una vez modificada la constancia de reconocimiento.
204. La automaticidad del proceso encuentra sustento adicional en el artículo 72 del Reglamento referido, que establece que “la Coordinación dará seguimiento a las gestiones de asistencia institucional y mantendrá informado al refugiado respecto de los avances y resultados obtenidos”, lo que implica una obligación de gestión proactiva por parte de COMAR. El artículo 73 complementa esta lógica al señalar que la persona refugiada debe realizar sus trámites “de manera personal, requiriendo la intervención de la Coordinación de manera excepcional cuando, a su juicio, requiera de respaldo institucional”.
205. En el caso específico de la adecuación de identidad de género, la vulnerabilidad interseccional de las personas trans refugiadas justifica plenamente que COMAR asuma la responsabilidad de coordinar automáticamente con el INM la actualización de toda la documentación, evitando exponer a la persona a múltiples procedimientos burocráticos que podrían perpetuar su situación de vulnerabilidad. El fundamento último de esta coordinación automática radica, adicionalmente, en el mandato constitucional del artículo 1°, que establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el marco de sus competencias.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

206. Por lo tanto, la secuencia COMAR-INM es normativamente justificada por la lógica institucional especializada, pero debe implementarse mediante un mecanismo automático de coordinación interinstitucional que garantice que la modificación de la constancia de refugiado genere inmediatamente la actualización correspondiente en toda la documentación migratoria, sin requerir gestiones adicionales por parte de la persona refugiada y respetando plenamente los estándares de confidencialidad, integralidad y celeridad establecidos para los procedimientos de reconocimiento de identidad de género; automaticidad y coordinación que, a su vez, abona a la seguridad jurídica que las normas buscan salvaguardar.
207. Con base en lo anterior, el argumento de la quejosa respecto a que la respuesta del INM vulnera múltiples derechos fundamentales al condicionar la modificación de su tarjeta de residencia permanente a un trámite previo ante COMAR es **parcialmente fundado**. Si bien existe una justificación normativa para la secuencia procedimental COMAR-INM basada en la especialización institucional y la coherencia documental, la implementación de esta secuencia tal como se planteó en el oficio impugnado efectivamente genera cargas irrazonables que vulneran los estándares constitucionales establecidos en el amparo en revisión 1317/2017.
208. La violación se configura no por la existencia de la secuencia en sí misma, sino por la ausencia de automaticidad y coordinación interinstitucional efectiva. Como establecimos, el Estado Mexicano debe desplegar sus esfuerzos para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de género en los registros, así como en los documentos de identidad, no tengan que emprender varios trámites ante una multiplicidad de autoridades. El condicionamiento procedimental implementado por el INM, al requerir gestiones separadas por parte de la quejosa, contradice este estándar constitucional y genera una carga irrazonable que vulnera

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

efectivamente sus derechos a la dignidad humana, identidad de género, libre desarrollo de la personalidad y el principio de no discriminación.

209. Ahora bien, el argumento sobre la naturaleza evasiva de la respuesta del INM es **infundado** y debe ser revaluado a la luz de la arquitectura institucional específica del sistema de refugio. Si bien es cierto que todas las autoridades tienen obligaciones autónomas en materia de derechos humanos conforme al artículo 1° constitucional, la división competencial entre COMAR e INM responde a una lógica jurídica coherente y especializada.

210. La COMAR es la autoridad competente para emitir la Constancia de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, de conformidad con los artículos 15⁹⁷, 32 y 33⁹⁸ del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Este documento, al constituir el reconocimiento formal del estatuto de refugiada, representa el fundamento jurídico sobre el cual el INM otorga la residencia permanente. En consecuencia, la información que contenga –incluidos los datos personales

⁹⁷ **Artículo 15.-** Serán atribuciones de la Coordinación las siguientes:

X. Llevar un registro actualizado de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria;

⁹⁸ **Artículo 32.-** Durante la entrevista, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones:

I. Proporcionar información sobre sus antecedentes personales, los cuales podrán ser verificados con las autoridades competentes;

II. Aportar con veracidad información sobre los motivos por los que salió de su país de origen o de residencia habitual y si, en su caso, proviene de un tercer país;

III. Aportar pruebas o, en su caso, explicar de manera satisfactoria la falta de las mismas;

IV. Relatar las circunstancias de las razones invocadas en apoyo de su solicitud, y

V. Proporcionar cualquier otra información que el entrevistador estime necesaria para esclarecer la existencia de fundados temores o amenazas en su contra.

Artículo 33.- La información sobre los antecedentes personales del solicitante a que se refiere la fracción I del artículo anterior, incluirá sus datos de identidad personal, tales como:

I. Nombre completo, alias o pseudónimos;

II. Fecha y lugar de nacimiento;

III. Nacionalidad o país de residencia habitual;

IV. Grupo étnico;

V. Sexo;

VI. Estado civil;

VII. Religión;

VIII. Ocupación;

IX. Grado máximo de estudios, e

X. Idioma o lengua que habla el solicitante.

Para efectos de evaluar las declaraciones con el objetivo de determinar los elementos objetivos y subjetivos del caso, el solicitante deberá aportar información sobre los familiares que lo acompañan y los que residan en cualquier otro país, así como la información que indique la intención del solicitante en permanecer en el país.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

como nombre y marcador de género— debe reflejar fielmente la identidad de la persona reconocida como refugiada, especialmente cuando dicha identidad ha sido la causa de la persecución que justifica su protección internacional.

211. Además, los artículos 32 y 33 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria refuerzan esta conclusión al establecer que la COMAR tiene competencia para recabar los datos personales que consten en los expedientes de las personas reconocidas como refugiadas, sin necesidad de validación externa por parte de otras autoridades administrativas o civiles. Esta Primera Sala sostiene que esta atribución comprende, por tanto, la facultad de adecuar el nombre y el género consignados en la constancia de reconocimiento, sobre todo cuando dichos datos forman parte de la identidad de género de la persona protegida.
212. Por tanto, la respuesta del INM no constituye propiamente una evasión de responsabilidades, sino el reconocimiento correcto de que COMAR es la autoridad competente para modificar la constancia de reconocimiento de refugiado. La obligación del INM es garantizar la coordinación efectiva una vez que COMAR actualice el documento base, no asumir facultades que corresponden a la autoridad especializada.
213. El argumento sobre la naturaleza primigenia de la tarjeta de residencia permanente debe ser matizado considerando la jerarquía documental establecida en el sistema de refugio. Si bien la tarjeta de residencia permanente contiene elementos identificatorios esenciales, funcionalmente no constituye el documento primigenio equivalente al acta de nacimiento para personas refugiadas.
214. En el sistema jurídico de refugio, la constancia de reconocimiento emitida por COMAR es el documento que cumple la función equivalente al acta de nacimiento, ya que constituye el “acto administrativo originario sobre el

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

cual el INM basa sus actos de documentación migratoria.” Esta constancia es el documento que certifica formalmente la identidad de la persona refugiada y establece el fundamento jurídico para todos los demás documentos migratorios.

215. La tarjeta de residencia permanente, aunque funcionalmente importante, es en realidad un documento derivado de la constancia de COMAR. Como se señala en el análisis, “la constancia que expide la COMAR debe ser entregada al INM para que este último pueda generar el documento migratorio correspondiente.” Esta secuencia documental refleja que la constancia de COMAR es el documento primigenio que debe modificarse primero para garantizar la coherencia del sistema.
216. Por tanto, la argumentación de la quejosa sobre estos dos puntos específicos no es enteramente fundada desde la perspectiva de la arquitectura institucional del sistema de refugio. La competencia de COMAR para modificar la constancia de reconocimiento es normativamente correcta, y esta constancia –no la tarjeta de residencia– constituye el documento primigenio equivalente al acta de nacimiento en el sistema de protección a refugiados.
217. El problema constitucional real no radica en la secuencia procedimental per se, sino en la falta de automaticidad y coordinación efectiva entre las autoridades, que genera cargas irrazonables para la persona refugiada. La solución constitucional adecuada es exigir que COMAR –como autoridad vinculada al cumplimiento de amparo– actualice la constancia de manera expedita y que esta actualización genere automáticamente la modificación correspondiente por parte del INM en toda la documentación migratoria, sin requerir trámites adicionales por parte de la quejosa.
218. Por lo tanto, esta Suprema Corte considera que el acto de aplicación, si bien contiene algunas apreciaciones adecuadas sobre el orden procedimental del cambio documental, también presenta problemas de

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

constitucionalidad, por un lado, en lo referente a su fundamentación y, por el otro, al exigir que la quejosa, una vez que haya acudido a la COMAR, tenga que realizar un trámite específico frente a dicha institución. De ahí que se ampare a la quejosa respecto del acto reclamado consistente en el oficio *****.

VII. EFECTOS

219. En virtud de lo razonado a lo largo de esta sentencia, se concede el amparo solicitado a favor de ***** para efectos restitutorios de sus derechos fundamentales, particularmente en lo que respecta a su derecho al reconocimiento legal de la identidad, su derecho a la personalidad jurídica y su derecho a la igualdad y no discriminación en el contexto del procedimiento migratorio.
220. En primer lugar, el efecto de esta sentencia es declarar la inconstitucionalidad de los artículos 63, segundo párrafo de la Ley de Migración; 167 de su Reglamento; así como los artículos 35, 55 y 56 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios en tanto que excluyen de forma discriminatoria la posibilidad de modificar la tarjeta de residencia para reflejar en el demarcador correspondiente la identidad de género. La consecuencia es la inaplicación de estas normas sólo en lo referente al impacto discriminatorio alegado, sin que esto pueda significar la imposibilidad posterior de notificar y efectivamente modificar otros cambios de situación de iure o de facto. Más aún, tampoco debe implicar no poder acceder a la reposición de documento migratorio. Debe recordarse que en el caso se analizaron las normas como un sistema normativo y únicamente en relación a la situación que la quejosa probó como vulneradora de sus derechos.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

221. Adicionalmente, se precisan los efectos concretos que deberá desplegar esta resolución, tanto para la autoridad responsable como para otras autoridades involucradas en el cumplimiento material de la ejecutoria.

A. Efectos respecto al Instituto Nacional de Migración (autoridad responsable)

222. Se declara sin efectos el oficio *****, por haber sido emitido con base en una interpretación de la normativa aplicable que, dadas las condiciones disposicionales, vulneraba el derecho de seguridad jurídica de la quejosa. Sin embargo, se reconoce esencialmente la labor interpretativa que la autoridad realizó con el objetivo de garantizar los derechos de la quejosa.

223. Se ordena al Instituto Nacional de Migración (INM) que emita una nueva tarjeta de residente permanente a nombre de *****, la cual deberá reflejar fielmente su identidad de género y nombre conforme a su voluntad y a los principios internacionales de no discriminación y dignidad humana. Esta nueva tarjeta deberá expedirse sin necesidad de que medie un trámite adicional por parte de la quejosa y a partir del momento en que reciba la constancia de reconocimiento de condición de refugiada debidamente modificada por la COMAR.

224. Se prohíbe al INM condicionar la emisión del nuevo documento migratorio al cumplimiento de requisitos no establecidos expresamente, así como exigir documentos que sean imposibles o irrazonables de obtener por parte de la quejosa, en atención a su estatus como mujer trans refugiada y a las particularidades de su situación jurídica. Asimismo, se ordena que se realicen los ajustes razonables necesarios para que el procedimiento se lleve a cabo bajo los principios de automaticidad y celeridad expuestos en la ejecutoria.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

B. Efectos respecto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (autoridad vinculada al cumplimiento)

225. A pesar de que la COMAR no fue señalada expresamente como autoridad responsable en el presente juicio, este Tribunal estima procedente su vinculación al cumplimiento de la sentencia, con base en el principio de eficacia y en atención a los artículos 77, 78⁹⁹ y 197 de la Ley de Amparo¹⁰⁰.
226. Además, esta posibilidad de vincular a autoridades diversas a las responsables para el cumplimiento de las sentencias de amparo es una consecuencia natural de la figura de la reparación integral. Hay ocasiones en las que se necesita la actuación de diversas autoridades para reparar una violación de derechos humanos y, al mismo tiempo, las reglas procesales del amparo no permiten que esas autoridades en particular sean partes del juicio desde su inicio, pues no tuvieron participación en los actos reclamados. Sostener lo contrario (es decir, que esas autoridades debían formar parte del juicio desde un inicio) obligaría a que los jueces y juezas sepan de antemano cuál va a ser la solución de fondo de un asunto para saber a qué autoridades notificar la demanda de amparo.¹⁰¹

⁹⁹ **Artículo 77.** Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá a la persona quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, la persona juzgadora deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la persona quejosa en el goce del derecho.

Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional.

Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto de la persona quejosa.

El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer a la persona quejosa en el pleno goce del derecho violado.

¹⁰⁰ **Artículo 197.** Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

¹⁰¹ Como un ejemplo de un caso en el que esta Sala vinculó a autoridades diversas a las responsables para el cumplimiento de un amparo véase el Amparo en Revisión 1068/2019, sentencia de 27 de mayo de 2020. Sobre la distinción entre autoridades responsables y autoridades vinculadas véase la Contradicción de Tesis 298/2018 de la Segunda Sala (sentencia

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

227. Esta vinculación es excepcional, y puede realizarse cuando: (i) existe una injerencia directa o indirecta de la autoridad en cuestión en el acto reclamado o en el cumplimiento de los efectos restitutorios; (ii) hay una relación de causalidad normativa y fáctica entre sus facultades y la reparación plena del derecho vulnerado; y (iii) su participación resulta indispensable para hacer efectiva la protección constitucional y evitar que la restitución quede sin eficacia práctica.
228. En el presente caso, se cumplen con claridad los tres supuestos. Conforme a lo señalado en la presente ejecutoria, la COMAR tiene la facultad exclusiva de emitir y modificar la Constancia de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, la cual constituye el documento base indispensable para que el INM pueda actualizar la tarjeta de residencia permanente.
229. De no modificarse dicha constancia, el cumplimiento del mandato judicial resultaría materialmente imposible, como se deduce del propio contenido del oficio que aquí se deja sin efectos. La fragmentación institucional entre el INM y la COMAR –caracterizada por la falta de mecanismos claros y coordinados para el reconocimiento de la identidad de personas refugiadas LGBTI+– es precisamente una de las fallas estructurales que da origen a la vulneración de derechos alegada por la quejosa, por lo que la reparación integral y efectiva exige su participación activa.
230. En suma, esta sentencia busca no solo restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, sino también establecer parámetros de actuación institucional que impidan la repetición de prácticas discriminatorias, aseguren el respeto a los derechos humanos en el ámbito migratorio y de refugio, y garanticen que el reconocimiento de la identidad de género, lejos de convertirse en un nuevo obstáculo, sea una vía

de 5 de septiembre de 2019).

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

efectiva para consolidar la protección internacional que el propio Estado ha decidido otorgar. En consecuencia:

231. Se ordena notificar formalmente a la COMAR el contenido de esta sentencia, a efecto de que tenga conocimiento de sus efectos jurídicos y realice las actuaciones que le corresponden.
232. Se le instruye para que modifique directamente la constancia de reconocimiento de la condición de refugiada de la quejosa, a fin de que refleje su identidad de género y nombre legal actualizado, sin necesidad de acudir al Registro Civil u otra instancia, atendiendo al principio de máxima protección y a sus competencias exclusivas en la materia (artículos 15, fracción X, 32, 33 y 85 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria).
233. Esta modificación deberá basarse exclusivamente en la manifestación de voluntad de la quejosa, sin requerir exámenes médicos, psicológicos u otras pruebas que tengan el efecto de patologizar o cuestionar su identidad de género, conforme a los estándares fijados en esta sentencia.
234. Además, aplicando los estándares establecidos en el amparo en revisión 1317/2017 al sistema de protección a refugiados, resulta constitucionalmente exigible que COMAR, una vez concluido el procedimiento administrativo para la adecuación de la identidad de género auto-percibida, deberá expedir una nueva constancia de reconocimiento de la condición de refugiado que refleje los cambios pertinentes pero sin evidenciar la identidad anterior; y, por cuanto hace a la constancia de reconocimiento primigenia, ésta debe quedar reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial.
235. Esta nueva constancia actualizada debe servir como fundamento para que el INM expida automáticamente una nueva tarjeta de residencia

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

permanente que refleje integralmente la identidad de género de la persona refugiada, sin que aparezcan referencias, anotaciones o indicios que revelen la modificación realizada. De igual manera, la tarjeta de residencia original debe quedar reservada en los archivos del INM y no debe ser objeto de expedición de copias o constancias, salvo los casos excepcionales previstos constitucionalmente.

236. Para equilibrar los derechos de la persona solicitante con las necesidades del orden público, siguiendo el mecanismo de protección establecido en el amparo en revisión 1317/2017, COMAR, una vez concluido el trámite de actualización de la constancia de reconocimiento, puede enviar oficios con la información correspondiente a la adecuación de la identidad (evidentemente en calidad de reservada) a las diversas Secretarías y organismos Federales o Estatales que, con motivo de los derechos y obligaciones contraídas por la persona refugiada, deban conocer del cambio de identidad.
237. Específicamente, esta comunicación reservada debe dirigirse al INM para la actualización automática de la tarjeta de residencia permanente y del Registro Nacional de Extranjeros, así como a otras autoridades competentes como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, la Secretaría de Educación Pública, las Procuradurías o Fiscalías, y cualquier otra dependencia que requiera conocer la actualización identitaria para el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la persona refugiada.
238. Este mecanismo, basado directamente en los criterios del amparo en revisión 1317/2017, garantiza que la protección de la identidad de género de las personas refugiadas trans se materialice de manera integral, confidencial y efectiva, sin generar cargas procedimentales adicionales para la persona titular del derecho y respetando plenamente tanto su

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

dignidad como las necesidades legítimas del orden público y seguridad jurídica.

VIII. DECISIÓN

239. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, al resultar parcialmente fundados los agravios y los conceptos de violación procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos fijados en el apartado anterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en contra de los artículos y actos reclamados en términos del último apartado de esta sentencia.

Notifíquese conforme a derecho corresponda. En su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de las señoras ministras y los señores ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente) y Loretta Ortiz Ahlf (presidenta).

Firman la ministra presidenta de la Primera Sala y el ministro Ponente, con el secretario de acuerdos, que autoriza y da fe.

AMPARO EN REVISIÓN 512/2023

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA

MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF

PONENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIÑAZA

En términos de lo previsto en los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.